

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA

**DISPOSICIONES SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO, SEGÚN LA LEY
SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS EN VENEZUELA**

Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Abogado

Autor: Carlos Eduardo Zambrano G.
C.I.: V-11.957.784
Tutora: María Mercedes Baptista
C.I: V-9.595.673

San Joaquín de Turmero, Junio 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA

**DISPOSICIONES SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO, SEGÚN LA LEY
SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS EN VENEZUELA**

Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Abogado

Autor: Carlos Eduardo Zambrano G.

San Joaquín de Turmero, Junio 2008

Ciudadana:

Coordinadora del Centro de Investigaciones
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la Universidad Bicentennial de Aragua.

Presente.-

Por medio de la presente, en mi carácter de Tutor del Trabajo Especial de Grado titulado DISPOSICIONES SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO, SEGÚN LA LEY SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS EN VENEZUELA, presentado por el ciudadano: CARLOS EDUARDO ZAMBRANO G., C.I. N° 11.957.784, considero que el mencionado trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En San Joaquín de Turmero, a los veinte (20) días del mes de Junio del año Dos Mil Ocho.

Atentamente,

Abogado: María Mercedes Baptista
C.I.: V-9.595.673

DEDICATORIA

A Dios Todopoderoso, al Santo Cristo de la grito, por darme sabiduría, y fortaleza en momentos difíciles.

A mis Padres que con su amor, cariño y comprensión han servido de guía y modelo.

A mi Esposa que en todo momento ha sido pilar fundamental para superar los obstáculos.

A mi hermana Damaris por su apoyo incondicional.

A mis hijos los cuales son motivo de inspiración.

A Norcys, Dubrasca, Saúl, Yisleiny, Edgar, y a todos los demás compañero que sin mencionarlos al leer este dedicatoria se que la van a sentir como suya.

El autor

AGRADECIMIENTO

A todos los profesores que a lo largo de la carrera como estudiante, contribuyeron en mi formación.

A la Doctora María Baptista, quien es mi tutor, y profesora de derecho penal, por su apoyo y ayuda incondicional, para que este trabajo se realizara con el mayor esmero y calidad posible.

ÍNDICE

DEDICATORIA	p.p.
AGRADECIMIENTO	III
RESUMEN	IV
INTRODUCCIÓN	VII
	1

CAPÍTULOS

I	MARCO DOCTRINARIO SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO EN VENEZUELA	11
	Generalidades	11
	Definiciones de Armas de Fuego	14
	Clasificación de las Armas de Fuego	16
	Las Armas de Fuego	17
	Antecedentes y Evolución.....	17
	Clasificación de las Armas de Fuego.....	18
	Según el Tipo de Ánima.....	19
	Según la Carga que Disparan	20
	Descripción de las Armas Cortas Tipo Revólver y Pistola	20
	El Revólver.....	20
	Características Especiales del Revólver	21
	La Pistola.....	21
	Características Especiales de la Pistola	22
	Diferencias entre las Armas Cortas de Tipo Revólver y Pistola.....	22
	Las Armas de Fuego como elemento identificador del delito consumado	23
II	BASES LEGALES QUE REGULAN EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO EN VENEZUELA.....	25
	Generalidades	25
	El Porte de Armas.....	27
	Institución competente para entregar el Porte de Armas	27
	Tipos de portes de armas de fuego.....	28
	Porte de defensa personal.....	28
	Requisitos para la obtención del porte de armas de defensa personal	29
	Porte Deportivo	29
	Requisitos para el porte que les permite legalmente usar armas de fuego con fines deportivos	29

Porte de uso comercial o de trabajo	30
Porte de armas para usar escopetas	31
Requisitos para el porte de escopetas.....	31
Disposiciones del Código Penal Venezolano Vigente.....	31
 III DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS A LAS ARMAS DE FUEGO PREVISTAS EN LA LEY SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS EN VENEZUELA	36
Consideraciones Previas	36
Reforma del Código Penal en Cuanto a los Delitos Contra el Orden Público (Octubre, 2000).....	43
Clasificación de las Armas de Fuego de Acuerdo con la Ley Sobre Armas y Explosivos	44
Armas de Guerra	44
Armas Prohibidas	46
Armas de Cacería	47
Armas de Uso Doméstico, Industrial y Agrícola	47
Políticas del Estado para el Desarme y la Violencia	51
Violación al Principio de Legalidad	54
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	62
Conclusiones.....	62
Recomendaciones	63
 MATERIALES DE REFERENCIA	65

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA

**DISPOSICIONES SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO, SEGÚN LA LEY
SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS EN VENEZUELA**

Autor: Carlos Eduardo Zambrano G.
Tutora: Maria Mercedes Baptista
Fecha: 2008

RESUMEN

La presente investigación cuya problemática está vinculada con las disposiciones sobre las armas de fuego, según la ley sobre armas y explosivos en Venezuela, reviste vital importancia, en virtud que en la actualidad el uso indiscriminado de armas de fuego de manera ilegal por parte de la ciudadanía, constituye un grave problema para el Estado venezolano, sin embargo, cuando se revisa el contenido de esta ley, se observa, que por tratarse de un instrumento jurídico que data de casi un siglo de vigencia, sus normas, especialmente las relativas a las armas de guerra, no se adaptan a la problemática que en la actualidad se presenta. En cuanto a la metodología empleada para llevar a cabo la investigación, fue utilizada la modalidad jurídica de tipo dogmática de carácter documental, aplicando los métodos deductivo – analítico y técnicas esencialmente documentales basadas en el manejo e interpretación de la normativa legal vigente. El autor concluyó con la consideración que la normativa jurídica prevista en la Ley Sobre Armas y Explosivos, concerniente a las armas de guerra, vulnera el principio de legalidad.

Descriptores: Armas de Fuego, Armas de Guerra, Delincuencia, Inseguridad, Ley, Explosivos, Porte.

INTRODUCCIÓN

El Problema

El Estado Venezolano, a través de sus órganos jurisdiccionales y el poder que le confiere el pueblo mediante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está en la obligación de garantizar la defensa de los derechos individuales fundamentales que contribuyan al bien común de la sociedad democrática organizada con el propósito de lograr el fin supremo, para que cada individuo pueda ejercer su participación principal y pluricultural en la búsqueda de un estado de justicia garante de la vida e integridad de las personas en la sana paz y convivencia, sin que los derechos de una menoscaben el de los demás.

De esta manera las futuras generaciones asegurarán un mejor porvenir de justicia y seguridad personal. Para ello, el Estado debe promover la cooperación pacífica de los integrantes de todos y cada uno de los niveles de la sociedad, sin discriminación alguna, amparado en el principio universal e indivisible de los Derechos Humanos.

En atención al anterior planteamiento, el Estado debe crear un cuerpo legal que garantice el cumplimiento, por parte de la Nación, del deber de resguardar los principios fundamentales inherentes a la persona humana, así como también evitar todo enfrentamiento violento entre los miembros de la sociedad que involucre el uso de armas de fuego con o sin autorización legal.

Estos hechos obligan al cumplimiento de las normas que regulan el desarme y el control de las armas contempladas en las reglamentaciones vigentes que han sido modificadas en el año 2000.

Si bien es cierto que estos hechos tienen un contenido eminentemente político, también es cierto que las armas están a disposición y manejo del pueblo soberano, pues se observa que éste se ha apartado de los principios

pacifistas y democráticos que caracterizan a la sociedad venezolana; también es una realidad que estas armas se encuentran en todas partes a la disposición de muchas personas, sin importar si están calificadas o no para portarlas. Cabe señalar también, que según Maldonado (2002);

Una cifra muy elevada de personas tienen acceso a las armas de forma ilegal y clandestina lo que exige y hace necesario con carácter de urgencia, el cumplimiento de la regulación del porte de armas y la aplicación de sanciones efectivas que colaboren a debilitar la impunidad que reina en el país. (p. 42).

A las situaciones referidas se une la falta de organización y control por parte del Estado, hecho éste, que no ha permitido un eficiente registro de las armas y municiones que abundan en las calles de cualquier ciudad del país. A ello se suma también la no existencia de estadística confiable alguna que señale el número de portes de armas otorgados. Por esta razón, las cifras que se manejan se basan en ciertas estimaciones que llegan, aproximadamente, a setecientos mil (700.000) autorizaciones (Ponencia del Diputado Carlos Tablante ante la Asamblea Nacional, 2002).

En este mismo orden de ideas, el Diputado Tablante presentó ante la Asamblea Nacional, a mediados del mes de Mayo de 2002, el Proyecto de Ley de Desarme General el cual fue aprobado por unanimidad por los Diputados de la Asamblea y que entró en vigencia en Agosto del mismo año como una respuesta rápida y eficaz ante el ascenso deliberado de la delincuencia.

Esta fue una medida temporal que debía ser resuelta plenamente con la inmediata intervención de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea, conjuntamente con la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas (DARFA), que tenían como objetivo trabajar en el proyecto de Ley de Armas y Explosivos, el cual actualmente está en agenda de la Asamblea

Nacional para su discusión y que de ser aprobado, derogará la Ley de Armas y Explosivos del año 1939, texto que orienta en el tratamiento del control de Armas y Explosivos.

Si bien la Ley de Armas y Explosivos ha tratado de clasificar estrictamente las armas con un criterio objetivo, tanto los tribunales como la doctrina imperante en Venezuela sobre la materia, han conjugado varios aspectos sobre la clasificación de estas, llegándose a fijar criterios discordantes, no solo de la distinción de cuando un arma es de guerra o no, sino también de su peligrosidad.

Cabe destacar, que el concepto de armas de guerra lo ha previsto el legislador en el artículo 3 de la Ley Sobre Armas y Explosivos en los siguientes términos:

Son armas de guerra todas las que se usen o puedan usarse en el Ejército, la Guardia Nacional y demás Cuerpos de Seguridad, para la defensa de la Nación y resguardo del orden público, tales como: cañones, obuses, morteros, ametralladoras, fusiles, carabinas y mosquetones; pistolas y revólveres de largo alcance; y, en general, todas aquellas armas que pudieren ser útiles en la guerra, de todas clases y calibres, de un tiro, de repetición, automáticas y semiautomáticas y sus respectivas municiones y aparejos para ponerlas en actividad; sables, espadas, espadines, lanzas y bayonetas; aparatos lanza-llamas; bombas, granadas de mano; gases y sustancias agresivas, así como las armas y dispositivos que puedan arrojarlos o los envases que puedan contenerlos. Quedan comprendidas entre las armas de guerra a que se refiere este artículo, todas las que sean de la misma especie de la que son actual propiedad de la Nación y de las que figuran en armamentos de guerra de otras Naciones, aún cuando no existan en el Parque Nacional.

A razón de lo descrito up supra, surge el problema de la presente investigación en el sentido de que, a criterio del investigador la enumeración

que hace el legislador de las armas de guerra es inútil y superflua, porque al exigir el requisito de propiedad de la nación, se está refiriendo a cualquier tipo de armas, por lo demás, es de lógica interpretación que las armas de gran potencia o de gran alcance solo tienen aplicación en el cuadro de las fuerzas armadas para su específica misión.

Por otra parte, se observa en el texto de la Ley Sobre Armas y Explosivos, la atribución de competencias a órganos o instituciones que en Venezuela, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), y del Código Orgánico Procesal Penal ya no existen, como es el caso de los Jueces Penales de Parroquia o Municipio, entre otros.

En virtud de lo expuesto, es clara la necesidad de realizar una reforma a la vigente Ley Sobre Armas y Explosivos, la cual, como se expuso, data de 1939 pues la clasificación de armas que en la actualidad existen no se ajusta a este instrumento jurídico.

Para orientar el estudio se establecieron las siguientes interrogantes:

- ¿Qué debe entenderse por armas y explosivos?.
- ¿Cuáles son las disposiciones legales que regulan las armas y explosivos en Venezuela?.
- ¿Están acordes los instrumentos jurídicos venezolanos que regulan lo concerniente a las armas y explosivos a la clasificación actual de estas?.

Objetivos

En busca de dar respuesta a las interrogantes surgidas, se estableció como **objetivo general**; analizar las disposiciones legales concernientes a las armas de fuego, según lo previsto en la Ley Sobre Armas y Explosivos en Venezuela; y como **objetivos específicos**, los siguientes: (a) estudiar la contextualización doctrinaria sobre las armas de fuego en Venezuela; (b) describir la

fundamentación relativa a las armas de fuego en el ordenamiento jurídico venezolano; (c) precisar las diversas disposiciones legales concernientes a las armas de fuego, según lo previsto en la Ley Sobre Armas y Explosivos en Venezuela.

Justificación

Uno de los aspectos de mayor relevancia llevados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), es el relativo a la seguridad de la ciudadanía, desarrollado en el artículo 55 del referido instrumento jurídico, el cual preceptúa un derecho por demás innovador en el texto constitucional como es el derecho a la seguridad ciudadana que debe garantizar el Estado por medio de los órganos competentes.

Cabe destacar que esa seguridad a la que hace referencia la disposición constitucional comentada, está dirigida a proteger al ciudadano frente a la delincuencia principalmente, en razón de ser ello un factor desestabilizador de la sociedad y también frente a cualquiera otra situaciones que pudieran representar una amenaza, riesgo o vulneración a los individuos que conforman esa sociedad.

Además de lo antes dicho, se limita en la norma aludida el uso de armas o sustancias tóxicas por parte de los órganos policiales de seguridad, de tal manera que esta disposición propugna una mejora y un desarrollo progresivo en el ámbito de la seguridad ciudadana, el cual es de suma importancia en la tranquilidad y estabilidad de la sociedad.

Sin embargo, llama la atención el hecho de que a pesar de tener el texto constitucional aproximadamente ocho años de vigencia, en Venezuela la normativa jurídica que regula el uso de las armas, se mantiene de manera casi intacta; para ello se puede citar la ley que dio lugar a este trabajo de investigación como es la Ley Sobre Armas y Explosivos, la cual como se

señaló, data de 1939 y presenta una clasificación desactualizada y ambigua acerca de las armas, especialmente las de guerra.

Lo anteriormente descrito apoya la justificación de este trabajo de investigación, en virtud de la necesidad que representa reformar la Ley Sobre Armas y Explosivos a los fines de adaptarla a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y a las clasificaciones que sobre estos objetos existen en la actualidad.

Alcance

Este estudio tiene como propósito principal, analizar las disposiciones legales concernientes a las armas de fuego, según lo previsto en la Ley Sobre Armas y Explosivos en Venezuela, por lo que dicho alcance esta supeditado a los análisis sistemáticos y críticos dirigidos a identificar el contenido y alcance de este importante instrumento jurídico.

Para ello, autor abordó los aspectos referentes a la fundamentación teórica y conceptual sobre las armas específicamente las de fuego, de acuerdo con lo previsto en la Ley Sobre Armas y Explosivos, y procedió a proponer sobre la necesidad de reformar artículos de este instrumento jurídico.

En consecuencia, a través del presente estudio se llegó a conclusiones relevantes sobre las disposiciones de la Ley Sobre Armas y Explosivos, por lo cual se hicieron las recomendaciones pertinentes al caso.

Por las argumentaciones expuestas, la investigación tuvo un alcance geográfico nacional, en virtud de que fue necesario emplear la normativa prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), sobre la seguridad ciudadana, el Código Penal venezolano (2005), en lo atinente a los delitos de porte ilícito, uso indebido, comercio y detención de armas de fuego y finalmente la Ley Sobre Armas y Explosivos, por ser el instrumento jurídico que dio origen a este trabajo de investigación.

Con respecto al alcance metodológico, la investigación se circunscribió a la modalidad de investigación jurídico dogmática, del tipo documental, mediante el empleo del método deductivo analítico.

Aportes

Con relación a los beneficios que esta investigación otorgará, dada la innegable importancia que esta temática hoy día muestra, la misma presupone que será de gran ayuda para estudiantes e investigadores, profesores y profesionales del derecho y para la colectividad en general que en algún momento requieran de información respecto de las disposiciones sobre las armas, según lo previsto en la Ley sobre Armas y Explosivos en Venezuela.

Metodología

El marco metodológico da cuenta del tipo de investigación que a su vez constituye la base técnico-operativa para el desarrollo de la misma.

Tipo de investigación

La siguiente investigación se sustentó en la modalidad de tipo documental, la cual según la Universidad Bicentennial de Aragua (2006), “es la que se ocupa de problemas planteados en el ámbito teórico, la información requerida para abordarlos se encuentran básicamente en materiales impresos, audiovisuales y/o electrónicos” (p. 43).

En cuanto, al nivel de la investigación, se debe indicar que el mismo fue descriptivo, que según Rodríguez (2000), “radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos” (p. 102). Las investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner en manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes.

Métodos de Investigación

Para efectos de esta investigación, el método seleccionado fue el deductivo, ya que va de lo general a lo particular, del fenómeno a los hechos y de la ley a los principios. Éste método, para Méndez (2005), “se suele utilizar para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite formulaciones lógicas”. (p. 70).

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Para la recolección de la información, se utilizó la técnica de revisión bibliográfica, donde Ramírez (2001) señala que: “es un proceso que requiere de atención voluntaria e inteligencia... dirigida hacia un objeto con el fin de obtener información” (p. 23).

También utilizó como técnica el análisis de contenido, la cual describe Sabino (2002) como “una técnica de investigación útil, especialmente para obtener información bastante profunda sobre temas complejos y difíciles de estudiar” (p.165). Es entonces necesario explicar, que el trabajo de investigación se basó principalmente en la visita de diferentes universidades de la región, públicas y privadas existentes, a los fines de consultar diferentes bibliografías; de igual forma se visitaron sitios de Internet, para realizar la recopilación de diferentes materiales escritos, consultar autores todos con referencia al tema principal de la investigación, realizando de esta manera, un análisis exhaustivo mediante la recolección de datos.

En cuanto a los instrumentos, de recolección de datos, se puede decir que son los distintos medios que se utilizan para hacer el registro de las informaciones obtenidas mediante la recopilación documental. Por su parte, Rodríguez (2001), sostiene que “los instrumentos de recopilación de información son aquellos medios impresos, dispositivos, herramientas o aparatos que se utilizan para registrar las informaciones o facilitar el

tratamiento experimental” (p. 127), por lo tanto, para la realización de esta investigación se utilizó las fichas bibliográficas y hemerográficas.

Procedimientos

Los procedimientos de la investigación según la Universidad Pedagógica Experimental Libertados (2003), “se refiere a la explicación del modelo metodológico asumido” (p. 28). En atención a lo expuesto, los procedimientos son la manera que emplea el investigador para recabar la información. Cabe destacar que este tipo de estudio se desarrolló en cinco fases, a saber:

1. Elección y delimitación del tema o problema: En este paso se destacó una situación o dificultad al fin de alcanzar su solución. En tal sentido, se tomó en consideración la relevancia del problema demostrando que su elección no es producto del azar, ya que éstas debe responder a las interrogantes, motivaciones e interese del investigador.
2. Acopio de la información: En esta fase, el investigador fue a las fuentes directas de información, visitas a bibliotecas y sitios de interés, donde se pudo obtener la información necesaria para la compilación de una bibliografía sobre el tema.
3. Organización de datos: Después de tener la información en fichas sintetizadas y analizadas, se elaboró un fichero de trabajo con la finalidad de clasificar la información con relación a los diferentes aspectos o variables que se tomaran en consideración para la investigación.
4. Análisis de los datos: En este paso se indicaron los procedimientos de análisis e interpretación de los datos y su posterior jerarquización. Por otro lado, se estructuraron y organizaron los datos en un esquema que permitió desarrollar el trabajo final.
5. Redacción del cuerpo del trabajo: Una vez que los datos fueron analizados e interpretados, se dio comienzo a la redacción del trabajo de investigación,

tomando en cuenta el plan a elaborar en la fase anterior. Luego se presentaron los resultados y hallazgos sobre el tema y se dieron a conocer las reflexiones críticas, conclusiones y recomendaciones.

Estructura Capítular

La investigación está comprendida en capítulos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: Capítulo I, referido al marco doctrinario sobre las armas de fuego en Venezuela. El Capítulo II, describe las bases legales que regulan el uso de las armas de fuego en Venezuela. El Capítulo III, explica las disposiciones legales relativas a las armas de fuego previstas en la ley sobre armas y explosivos en Venezuela. Y, finalmente, el autor concluye esta investigación con un cuerpo de conclusiones y recomendaciones que produce al término de la investigación.

CAPÍTULO I

MARCO DOCTRINARIO SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO EN VENEZUELA

Generalidades

En la prehistoria, el ser humano utilizó la piedra como arma y utensilio, primero lo hizo en forma rudimentaria, a base de buscar siempre un filo cortante. Posteriormente le añadió a la piedra un mango que era de madera o de hueso. Miles de años después llega a pulimentar la piedra y a darle forma, lo mismo hace con los huesos y la madera; un paso más en este proceso fue el descubrimiento de los metales como el cobre, la plata y el hierro. De esta manera puede afirmarse que con ello, el ser humano ponía los cimientos de la civilización y que entraba a la historia.

Debe considerarse por otra parte, que la piedra era utilizada como arma de defensa y ataque, sin omitir que la madera tenía su utilidad; estas armas empleadas por el hombre prehistórico fueron necesarias para su subsistencia en un mundo hostil, poblado de animales de gran fuerza y tamaño, sin descartar que después usara armas en las luchas con otras tribus, de allí que según Olbrich (2001);

“El que disponía de más armas tenía mayor poder. Por demás se explica, que con el descubrimiento de la piedra y la madera fueron las primeras armas del hombre primitivo y ambas con el dominio del fuego sentaron las bases de la supremacía humana en la tierra. (p. 116).

Con la llegada del período neolítico, el hombre se asienta en poblados y se ocupa de los trabajos agrícolas, pero lo más importante es la aparición del arco y las flechas. La flecha produjo la creación del escudo y la armadura y así poder parar los ataques que le hacía a distancia, y los arcos eran contruidos con una rama tensada con un tendón que no eran lo suficientemente potentes,

pero en el futuro el arco y la flecha fueron perfeccionados.

Dentro de este orden de ideas, según Olbrich (2005); “a finales del siglo IV los chinos inventaron la pólvora negra, más no concibieron las armas de fuego como se conocen hoy día, solamente utilizaron la pólvora para fabricar cohetes y fuegos artificiales”. (p. 114).

En este sentido se comprende que la pólvora es una composición básicamente de salitre, azufre y carbón, dejando después de la combustión gran cantidad de residuos y arrojando exceso de humo, por oposición a este fenómeno a las pólvoras modernas. Posteriormente, según Maldonado (2004);

Los árabes que fueron los grandes comerciantes de la edad media, y gracias a ellos la pólvora llegó al continente Europeo, y con la avanzada cultura de estas naciones se llegó al desarrollo del concepto básico del arma de fuego, en el que la pólvora al quemarse genera gases que impulsan el proyectil por el tubo-cañón. Es por ello, que en el siglo VIII se comenzaron a observar piezas de artillerías en las batallas europeas, sobre todo en España, que para aquel entonces estaba ocupada por los árabes, y éstos la mantenían bajo su dominio. (p. 49).

De este modo, la artillería se fue ganando lentamente la confianza de los ejércitos, pero éstos todavía luchaban armados de espada y flechas, por lo que fue necesario el perfeccionamiento del proceso de elaboración de la pólvora, mediante el sistema de separación de granos de diferentes tamaños, para poder desarrollar armas portátiles eficaces.

Dentro de esta perspectiva, las armas de fuego fueron evolucionando como pequeños cañones de mano, ejemplo de ello fue el mosquete en el siglo XVI, el cual pesaba aproximadamente entre 8 y 10 kilos, en este sentido, los soldados que lo portaban debían ser vigorosos y aun así, el mosquete reposaba sobre una base llamada horquilla que se clavaba en el suelo y que le daba un punto de apoyo. Su calibre era de hasta 22mm, y el peso de la bala de unos 50

gramos, para la carga de la pólvora se tomaba la mitad del proyectil.

Ahora bien, con el desarrollo de nuevas técnicas aparece en el siglo XVII el arcabuz, que según Madonado (2004);

Es un arma de fuego larga individual la cual se volvió tan efectiva como para dominar las tácticas en batalla; el alcance efectivo del arcabuz alcanzaba los 100 metros. Debe señalarse que el sistema de ignición de la pólvora se fue corrigiendo de manera paulatina, iniciándose con el cordel o mecha con brasa al rojo, el cual se arrimaba a la cazoleta de polvorín para producir el disparo; evolucionando luego un mecanismo que lo sostenía hasta el momento de que deseaba disparar, acercándolo manualmente se denominaba llave de mecha. La llave de mecha optimizó la ignición de la pólvora, pues en él un mecanismo de resorte imprime un movimiento giratorio a la rueda de metal, provocando un torrente de chispas sobre el polvorín. (p. 82).

Resulta claro, que con la llave de chispa llegó para quedarse casi dos siglos, conjuntamente con el mecanismo de resorte que le imprime un movimiento pivotante y con la fuerza al trozo de pedernal, que al chocar con el depósito de pólvora produce chispas que incendian el polvorín. Con la invención del fulminante y de la llave de percusión, fue una gran revolución en cuanto a la fiabilidad en el disparo, ya que por fin quedaba eliminada la cazoleta con el polvorín, que tanto trabajo daba mantener seco y en su sitio, la forma de la llave de percusión no varió mucho con respecto a las anteriores, a partir de aquí el mecanismo se basó en que el martillo golpeaba el portan pistón y su fulminante, el cual transmite la pequeña pero intensa llama por el oído hasta la recámara.

De esta manera, a mediados del siglo XIX, lo último en armamento individual de los ejércitos eran los fusiles de avancarga, con llave de percusión, cañón de anima lisa, calibre y de igual manera se contaban con las miras fijas de un alcance considerable para los fines propuestos es la batalla, el cual la

mira de los enemigos a larga distancia.

Ahora bien, a través de la evolución histórica de las armas hasta los momentos no ha definido lo que es un arma y en tal sentido es importante mencionar a continuación las diferentes acepciones de los que son armas en general y especialmente las armas de fuego.

Definiciones de Armas de Fuego

A título ilustrativo se debe entender por armas, en sentido amplio todos los objetos, utensilios o instrumentos que puedan servir en cualquier modo para ofender, o para defender, cualquiera sea la forma y por ende su destinación. En este sentido Ossorio (2000) en su *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales* establece que arma es “Todo instrumento destinado al ataque o a la defensa. Defensivas u ofensivas, las armas suelen ensombrecer a la humanidad desde el delito hasta la guerra, sin excluir empleos al servicio del bien y de lo juntos”. (p. 98).

Es importante significar, que la anterior definición corresponde a una distinción genérica de las armas que de acuerdo con la legislación venezolana, específicamente en el Código Penal, en el dispositivo contenido en el artículo 274 establece “son armas, en general todos los instrumentos propios para maltratar o herir, más para los efectos de este capítulo, sólo se considerarán como tales las que se enuncien en la ley citada en el artículo anterior”. De igual manera, el mismo código describe en su artículo 518 lo siguiente:

Para los efectos de la ley penal se consideran armas insidiosas las que son fácilmente disimuladas y sirven para ofender por sorpresa o asechanza, tales como las hojas, estoques, puñales, cuchillos, pistolas y revólveres de corto cañón, aparatos explosivos y las armas blancas o de fuego que se hallan ocultas o disimuladas de cualquier modo en bastones u otros objetos de uso lícito.

Visto de esta forma, es de hacer notar de lo antes descritos que las armas

blancas son de fácil porte, de allí pues, que las armas insidiosas poseen ciertas características dentro de las cuales se destaca, que son fácilmente disimulables por el agente a los fines de que pueda actuar o atacar por sorpresa, es decir, aquellas que con la simple acción del sujeto, como lo es accionar un botón, abren sus hojas cortantes, así mismo son las navajas de las llamadas comúnmente pico de loro.

Por lo demás, resulta claro que de la norma transcrita se desprenden las armas de fuego punto elemental dentro de este trabajo de investigación por consiguiente se puntualizan a continuación.

Se explica, que en la práctica muchos autores coinciden en la definición dada a las armas de fuego. En la apreciación de Moreno (1996), las define como “aquellos instrumentos de dimensiones y formas diversas, destinadas a lanzar violentamente ciertos proyectiles aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se desprenden en el momento de la deflagración de la pólvora”. (p. 72).

Se puede interpretar del contenido de esta definición, en el hecho que por ser el fuego el que origina el proceso que termina con la expulsión violenta del proyectil al espacio, ha dado lugar a que estos aparatos mecánicos, inventado para diversos objetivos y fines diversos, reciben el nombre de armas de fuego.

Por otra parte Larrea, (citado por Montero 1998) expresa que: “Es el conjunto de elementos mecánicos que funcionando en forma normal y armónica entre sí, resulta capaz de lanzar con fuerza y precisión que varían conforme al tipo de arma, cartucho y proyectil”. (p. 29)

De igual manera Maza (1997) en su obra titulada *Manual de Criminalística* enuncia que: “Es aquel ingenio mecánico que realiza la función de lanzar a distancia, con gran velocidad masas, llamadas proyectiles, utilizando la energía explosiva de la pólvora”. (p. 26)

Se deduce entonces que las armas de fuego consisten en una creación ingenio de efectos mecánicos que pueden reunir características propias de su diseño, las cuales obedecen al sometimiento de rigurosos tratamientos mecánicos y tecnológicos durante su proceso de fabricación. Es evidente que las armas de fuego proveen un medio de defensa o ataque, según sea la finalidad del empleo por parte de quien la utiliza, que constituye el punto de partida en la comisión de los hechos punibles en donde se ven involucradas.

Clasificación de las Armas de Fuego

En un plano práctico y muy general, las armas de fuego constituyen el elemento principal del estudio judicial de los delitos y situaciones donde se ve involucrada su utilización. Evidentemente, esta característica se explica por la relación que nace y existe entre el arma utilizada y aquella persona a quien se le presume su accionar, donde el objetivo primordial de la investigación es determinar las circunstancias bajo las cuales se ha llevado a cabo el hecho en cuestión.

En razón de lo anterior, es necesario estudiar y examinar las generalidades de los extremos y elementos característicos de este tipo de arma, tomando en consideración las opiniones y consideraciones de diferentes expertos en la materia, nacionales y extranjeros, de los cuales se extraen distintos criterios fundados en sus estudios y obras, señalados oportunamente en el contenido del presente capítulo.

Debe advertirse, por lo anteriormente expuesto, que en virtud al complejo y técnico criterio y lenguaje utilizado por los estudiosos de la materia de balística, y más concretamente en lo que a las armas de fuego corresponde. en ocasiones se hace referencia a sus explicaciones sin interpretaciones a las expuestas en sus textos, ya que en gran parte de sus estudios no es posible reemplazar ni realizar éstas a las definiciones y términos utilizados, por ser

comunes y necesarias para la comprensión deseada del objetivo abordado.

Las Armas de Fuego

Antecedentes y Evolución

Históricamente la definición más simple y sencilla de armas de fuego sería la de un tubo con carga de pólvora u otra sustancia propelente para lanzar proyectiles. bien sean éstos piedras, balas, flechas, u otros objetos semejantes. Así como ocurre con la pólvora, se dificulta establecer el momento de la aparición de las armas de fuego, si se hace un seguimiento más o menos evolutivo, se pueden obtener datos de donde se desprende que desde tiempos antiquísimos se empleó el tubo lanzallamas con el fin de causar incendios y aterrorizar al enemigo.

En tal sentido, se señala Chiossone (1987), que;

La primera referencia parece indicar que fueron los romanos los primeros que utilizaron estos tubos de madera o bambú que cargaban con pólvora y bolas de trapo impregnadas de petróleo crudo. Sin embargo, hay quienes sostienen que los primeros en utilizarlos fueron los chinos, aproximadamente por el año 1259. Asimismo, otras referencias indican que fueron los sarracenos quienes utilizaron un cañón lanzapiedras para la defensa de Sevilla en el año 1247. En todo caso, muchas otras referencias indican que las primeras armas de fuego datan de mediados del siglo XIII y principios del siglo XIV. (p. 160).

Respecto a la evolución de las armas de fuego, resultaría imposible detallar cada periodo, y más aún, de cada sistema, dado que cada pueblo en forma más o menos lenta, fue agregando a sus tubos iniciales, distintos elementos según su audacia y su cultura. En la historia, las primeras armas de calidades balísticas aparecieron en 1327, según se evidencia en documentos ingleses sobre la historia de la artillería. Sin embargo, son los italianos quienes reclaman para si este invento, situando en 1324 el año en que probaron el

primer cañón de mecha, el canon lock, tanto de uso manual como fijo en una tabla, este cañón tuvo vigencia hasta principios de del siglo XV, cuando apareció el match-lock.

En la práctica, muchos autores coinciden en la definición dada a las armas de fuego. En la apreciación de Moreno (1996), este las define como “aquellos instrumentos de dimensiones y formas diversas, destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se desprenden en el momento de la deflagración de la pólvora” (p. 20). Se puede interpretar el contenido de esta definición en el hecho que por ser el fuego el que origina el proceso que termina con la expulsión violenta del proyectil al espacio, ha dado lugar a que estos aparatos mecánicos, inventados para objetivos y fines diversos, reciban el nombre de armas de fuego.

Se deduce entonces que las armas de fuego consisten en un ingenio mecánico que pueden reunir características propias de su diseño, las cuales obedecen al sometimiento de rigurosos tratamientos mecánicos y tecnológicos durante su proceso de fabricación. Es evidente que las armas de fuego proveen un medio de defensa o ataque, según sea la finalidad del empleo por parte de quien la utiliza, que constituye el punto de partida en las investigaciones judiciales para el esclarecimiento de algún hecho donde se vean involucradas aquellas.

Concretamente, en atención al interés y aporte que debe arrojar el presente estudio, la definición de armas, en donde se incluyen a las anuas de fuego, dentro del Ordenamiento jurídico penal venezolano se encuentra consagrada en el artículo 518 del Código Penal vigente, cuya vinculación al respecto se establecerá posteriormente.

Clasificación de las Armas de Fuego

Son varias las clasificaciones de armas de fuego realizadas por distintos

autores, donde en muchas de ellas se va desde la más sencilla hasta la más compleja, llegando incluso, en algunas de esas clasificaciones, a mencionar los tipos de armas químicas y biológicas existentes en la actualidad. No obstante, y atendiendo a la más sencilla, concreta y suficientemente completa. se considera la realizada por Pérez, (2001), la cual se resume y estructura como a continuación se detalla:

Según la Longitud del Cañón

Armas de fuego cortas: Las cuales comprenden las siguientes variedades: revólveres, pistolas automáticas y pistolas ametralladoras.

Armas de fuego largas: Entre las cuales encontramos: escopetas de caza, fusiles, carabinas, fusiles ametralladoras y el subfusil o metralleta.

Según el Tipo de Ánima

De ánima lisa: Como por ejemplo las escopetas.

De ánima rayada o estriada: entre las cuales se encuentran los revólveres, pistolas, fusiles, metralletas, entre otras. Se caracterizan por los surcos y eminencias helicoidales que tienen dibujadas en el ánima del cañón. A los surcos se les denominan estrías, mientras que a las eminencias helicoidales se les llama campos o mesetas.

La dirección de las estrías puede ser de izquierda a derecha o a la inversa, de acuerdo a la fábrica que produce el arma. Al igual que las estrías, los campos, lo mismo que su ancho y profundidad o altura, varían según la fabricación y el tipo de arma. Todos estos detalles son de vital importancia en la identificación de los proyectiles.

Según su Forma de Cargar

Avant-carga: Aquellas que se cargan por la boca de fuego.

Retrocarga: Aquellas que se cargan por la recámara.

Según la Carga que Disparan

De proyectil único.

De proyectiles múltiples.

Descripción de las Armas Cortas Tipo Revólver y Pistola

En opinión del Autor, según el análisis de diversas posiciones doctrinarias, así como desde el punto de vista de la investigación criminal, las armas de fuego más usadas por los delincuentes en la comisión de hechos punibles son las de cañón corto, específicamente los revólveres y las pistolas, esto no quiere decir sin embargo, que en la actualidad, aunque no muy frecuentemente, no se esté incrementando el empleo de armas de fuego de cañón largo, del tipo de metralleta o fúsil, por ejemplo, a medida del crecimiento y auge del hampa común y la delincuencia organizada.

Ahora bien, y en atención a las consideraciones y explicaciones del autor citado anteriormente a continuación se detallan las generalidades y características relevantes que permiten la identificación y diferenciación entre los dos tipo de armas cortas usadas con más frecuencia.

El Revólver

Es un arma corta, de proyectil único, que básicamente está integrado por cuatro conjuntos, como son el cañón, que es un tubo estriado que resulta de la perforación de una barra de acero. Se define siempre por el calibre y la longitud en pulgadas, posee también, el tambor, el cual se encuentra integrado por la pera, los alvéolos y el eje, sirve solamente para alojar los cartuchos y colocarlos en posición de disparo, es especial para cada tipo de revólver. Gira sobre un eje que se asegura en la caja.

Presenta también, el cajón de los mecanismos, siendo que esta parte comprende desde el alojamiento del tambor hasta la empuñadura, llegando a comprender ésta, sus piezas fundamentales son, el martillo, el percutor, los

fiadores y el disparador.

Por su parte, la caja, sirve de armazón, contiene el guardamonte, el seguro del tambor, el punto de mira posterior o ranura y las cachas.

Características Especiales del Revólver

Esta arma de fuego presenta las siguientes características:

- Es un arma de carga manual.
- El seguro propio del arma es interno y no se opera manualmente.
- Los revólveres de calidad corriente y en buen estado, nunca pueden dispararse solos, es decir, siempre es necesario oprimir el disparador.
- La característica especial de este tipo de armas es que al accionar el martillo, montar el arma, o al accionar el disparador sin montarlo, el tambor gira hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto significa que el cartucho que se dispara es el que normalmente esté al lado izquierdo o derecho, nunca el que está alineado, de igual manera, no se dispara por la simple acción del gatillo, y requiere necesariamente la acción sobre el disparador.

La Pistola

De acuerdo a lo expuesto por maza (2001);

Al igual que el revólver, es un arma de fuego del tipo de cañón corto. Está integrado por los siguientes conjuntos, el cañón, básicamente posee las mismas características del cañón del revólver, pero en algunas pistolas es desmontable sin necesidad de utilizar aparatos especiales. (p. 49).

Es importante señalar, que además la pistola posee una pieza denominada corredera y es el conjunto que se desliza hacia atrás en el momento de cargarla, sea por acción manual o automáticamente por acción de los gases, contiene el percutor, el extractor y el cerrojo, como piezas más importantes.

Tiene además, según Maza (2001), el cajón de los mecanismos, el cual

contiene las siguientes piezas de disparo, el disparador, el martillo y los fiadores, por su parte, la caja, como en todas las armas, constituye el armazón, y contiene los aparatos de puntería, alza o ranura, el seguro del cerrojo y el seguro del proveedor.

Características Especiales de la Pistola

Es un arma de diseño semiautomático, a excepción de algunas muy especializadas que se cargan tiro a tiro, siendo que por desgaste del fiador, puede volverse automática, sucede lo mismo cuando se pega la aguja precursora, así por desgaste del fiador o por pegarse la aguja percutora, puede suceder que se dispare con un golpe, sin necesidad de accionar el disparador, y se les identifica corrientemente por el calibre y la marca.

Diferencias entre las Armas Cortas de Tipo Revólver y Pistola

En muchas ocasiones se presentan dudas sobre los términos pistola y revólver. Sobre la base de las explicaciones anteriores y de los aportes de los expertos de la materia, se puede determinar, que básicamente la diferenciación se establece, porque la pistola es un arma no automática, semiautomática, o automática, y el revólver es un arma de tiro a tiro, que puede ser de acción simple o de doble acción. Los de acción simple, cada vez que se efectúe un disparo, se debe montar el gatillo con la mano, mientras que en los de doble acción, con sólo presionar el disparador se hace girar el cilindro y se coloca el gatillo en posición de disparo, gracias a un sistema especial de palancas.

El sistema de alimentación de la pistola consta de un proveedor, en tanto que el revólver posee un tambor giratorio con un número determinado de alvéolos. En la pistola, una vez que se ha cargado, se monta desplazando hacia atrás y hacia delante la corredera, quedando el arma lista para disparar.

Realizado esto, se puede disparar accionando la cola del disparador cuantas veces se quiera, finalizando el ciclo cuando se acaban los cartuchos

que portaba el proveedor. Cada vez que se acciona la cola del disparador, sale un proyectil y la corredera tiene movimientos simultáneos hacia atrás y adelante expulsando una vainilla y llevando un nuevo cartucho a la recámara para un nuevo disparo, mientras tanto, en el revólver, el tambor gira de izquierda a derecha o viceversa, según la marca, cada vez que se realiza un disparo, acción ésta que se efectúa en un movimiento simple o sencillo, según se monte o no el martillo del arma.

Consideración el autor, que una de las diferencias más resaltantes entre ambos tipos de armas, y que constituye un punto de partida en la investigación criminal del experto en balística, nace del hecho que la pistola, así como las armas automáticas, una vez utilizada y disparada, expulsan las vainillas de la recámara del arma, las cuales se encontrarán en la escena donde se llevó a cabo la acción delictuosa, es decir, en el lugar de los hechos, mientras que los revólveres no proveen esta ventaja para el experto en balística, ya que sus vainillas quedan alojadas en los alvéolos del tambor del arma una vez que se han efectuado los disparos.

Las Armas de Fuego como elemento identificador del delito consumado

El fundamento principal y por excelencia cuando se procede a la identificación de un arma de fuego, está determinado por el hecho de que no existen dos armas que produzcan las mismas huellas o características en los elementos de su munición (vainillas, cartuchos, por ejemplo).

Esto lleva a la afirmación del investigador que cada arma de fuego posee características bien definidas, las que permiten distinguirlas y diferenciarlas de todas y cada una de las armas de la misma marca y calibre, aunque sean de serie y numeración sucesiva, y son esas características las que más adelante se desarrollarán para así lograr una comprensión más detallada de cómo se determina la individualización de un arma de fuego implicada en la comisión

de un hecho punible.

Ahora bien, según ideas anteriores queda establecido que cuando se trata de identificar las características de un arma de fuego, y sobre todo, quien es el responsable de su accionar, se debe emplear la prueba balística. Es menester y está claramente determinado que a través de esta prueba se obtendrán las conclusiones técnicas y científicas necesarias para conocer el tipo de arma, sus características, y demás circunstancias inherentes a ella, y así lograr determinar su efectiva utilización en el delito y realizar la posible relación o vinculación con la persona a quien se le imputa su participación y manejo.

Lo anterior es lo que permite entender que, por medio del estudio y aplicación de la prueba balística, se puede identificar un arma de fuego a través de sus elementos característicos que permitan su diferenciación respecto a otras armas de aspecto similar. Es por ello que a continuación se realiza un estudio y análisis concreto de aquellos elementos identificadores más relevantes que van a permitir esa identificación e individualización de un arma de fuego.

Ya se comentó que las armas de fuego poseen características propias de su diseño y fabricación que permiten su individualización respecto de otras armas, aun siendo de la misma serie y numeración.

La personalidad o individualización del arma de fuego se va consolidando con el uso, de allí que se diga que en balística no existen armas viejas o nuevas, sino de mucho o poco uso, y bien o mal cuidada.

CAPÍTULO II

BASES LEGALES QUE REGULAN EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO EN VENEZUELA

Generalidades

Las armas de fuego, según Larrea, citado por Montero (1998), son definidas como: "...el conjunto de elementos mecánicos que funcionando en forma normal y armónica entre sí, resulta capaz de lanzar con fuerza y precisión que varían conforme al tipo de arma, cartucho y proyectil. (p. 29).

Es así como, en los tiempos actuales una gran mayoría de homicidios, heridas y lesiones se producen mediante el empleo de las armas de fuego.

De allí pues, como resultado de ello las comunidades o población civil ha optado por armar de dichos instrumentos, en su afán de dar seguridad personal o protección a sus familiares. Es por ello, que el Estado ha adoptado normas de carácter público para reglamentar todo lo concerniente a la fabricación, tenencia, posesión y el uso de las armas de fuego por parte de las comunidades; señalando en qué casos se comete la infracción penal, y cual sería aquella situación en que las actividades en torno de las armas se efectúen en contravención de los dispositivos del Código Penal Venezolano vigente así como de las demás leyes especiales creadas para tal efecto.

Así, en su artículo 133, trata acerca de la posesión de armas de fuego cuando dispone que:

Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en el país pasará a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La fabricación, comercio, posesión y uso de otras armas serán reglamentados por la ley.

Conforme se evidencia del artículo antes citado, se entiende que el Estado es el único que puede tener posesión de las armas de guerra y usarlas cuando

fuese conveniente; es decir, su uso exclusivo y excluyente son las situaciones bélicas.

Ahora bien, la fabricación, comercio, posesión y el uso de otras armas serán regulada por las leyes correspondientes, el cual será la Ley sobre Armas y Explosivos. De igual manera, el artículo 324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su contenido expresa lo siguiente:

Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país, pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.

De allí pues, que se deduce del artículo antes citado, que toda arma de guerra que se fabrique en Venezuela se hará propiedad de la República, y a diferencia con el artículo 133, éste señala que el organismo competente pasa a encargarse de ellos, son las Fuerzas Armadas Nacionales con carácter de exclusividad, en este sentido, esta institución tiene que ver también con los civiles, pues tiene a su cargo el registro, posesión y comercio de otras armas, referidas a las pistolas y escopetas de caza.

Es así, como en el artículo citado es más amplio en relación al uso y porte de las armas de fuego. De esta manera, una vez conocido los artículos expresados en la de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referentes a las armas de fuego, en cuanto a la fabricación y porte, se pasara a establecer una síntesis de lo que es el porte, uso, tenencia, importación y fabricación de las armas de fuego.

El Porte de Armas

El porte de armas, es definido por Maza (2001);

Como una credencial que otorga el Ejecutivo Nacional previo al cumplimiento de los requisitos y la verificación de los antecedentes penales del interesado; así mismo autoriza el porte de un arma en particular, cuyas características están especificados en el mismo. (p. 82).

Ahora bien, *Diccionario Jurídico Venezolano D&F*, (1998), definen la tenencia de armas como: “La posesión actual por una persona civil, natural o jurídica de las armas de fuego de acuerdo a sus características, es decir, tener dominio de la misma, a un lado su solicitud”. (p. 136), definiendo también la tenencia y comercio, como: “...la forma de haber adquirido previamente un arma de fuego, por lo que toda persona por el sólo hecho de haberla comprado sería responsable, del presente ilícito”. (p. 136)

De esta forma, el uso de armas de fuego, está vinculada con la tenencia de la misma, que puede ser ilegal o legal, es decir, para dar uso al arma de fuego, es necesario poseer un dominio o posesión permanente de armas, a ello se relaciona el ánimo de usarla para defensa persona, deportivo cacería o uso indebido, como el cometer hechos delictivos.

De allí pues, que en virtud del uso indiscriminado de las armas de fuego que se vive en los actuales momentos en Venezuela; se requiere conocer para el siguiente estudio, los requisitos para obtener el permiso de porte, los tipos de porte que se puede expedir y la institución competente para otorgar dichos permisos o portes.

Institución competente para entregar el Porte de Armas

Hasta el mes de Mayo del 2000, los permisos para portes de armas eran otorgados por la Dirección de Armas y Explosivos del Ministerio de

Relaciones Interiores, sin embargo, a partir del mes de Junio de 2000, por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 324, se entrega esta responsabilidad a la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA), con sede en el Fuerte Tiuna, El Valle, Caracas, Distrito Capital; la cual se reserva la potestad de concederla o negarla, fundamentándose para ello en el examen de la documentación consignada, la consulta de su archivo y las especificaciones técnicas del arma.

En tal sentido, no será otorgado el porte de arma de fuego de ningún tipo, a personas con antecedentes penales o reseña policial por conducta manifiesta y reincidente en contra de la paz y compostura ciudadana. Así mismo, la Dirección de Armamento podrá, cuando lo juzgue conveniente, revocar cualquier permiso, porte, licencia de arma de fuego, o similares.

Ahora bien, la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional dispone una serie de requisitos para la obtención del porte de armas de fuego; como es el caso de las personas que soliciten por primera vez y renueva la licencia de arma de fuego, debe anexar el Certificado Original de haber aprobado el Curso Básico de Manipulación, Manejo y Tiro cuya vigencia será de cinco (05) años, el cual debe ser dictado por un Instructor registrado y autorizado por la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA).

Tipos de portes de armas de fuego

Porte de defensa personal

Se trata de un permiso otorgado a personas civiles o naturales, que les permite legalmente, tener trasladar, manipular y usar armas de fuego con sus respectivas municiones en pro de la defensa personal, delimitándose su uso según las restricciones contenidas en leyes, Códigos y reglamentos vigentes de la jurisprudencia venezolana.

Requisitos para la obtención del porte de armas de defensa personal

De acuerdo con la normativa interna de la dirección de armamento de la Fuerza Armada Nacional, se exigen los siguientes recaudos:

- Dos (02) fotografías recientes a color del tamaño 5x5 cms., de frente, en traje formal, fondo blanco, sin lentes y sin sombrero (no engrape las fotos).
- Planilla de solicitud de permiso de Porte de Armas.
- Constancia de Trabajo o Registro Mercantil.
- Carta de Residencia expedida por la Primera Autoridad Civil de su localidad.
- Dos (02) referencias personales, donde indique la dirección de habitación, trabajo, teléfono de ubicación y fotocopia de la cédula de identidad del referente.
- Carta de Exposición de Motivos.
- Planilla de pago de impuestos fiscales (SENIAT forma 16), debidamente cancelada.
- Dos (02) unidades tributarias por armas y por año de permiso.
- Fotocopia de la factura o documento que acredite la propiedad del arma y si el arma es asignada anexar su comprobante.
- Fotocopia nítida de la cédula de identidad a 150% de ampliación, laminada y vigente.
- Certificado de haber aprobado el Curso Básico de Manipulación, Manejo y Tiro cuya vigencia será de cinco (05) años.

Porte Deportivo

El porte deportivo, se trata de un permiso otorgado a civiles o personas naturales, y les permite legalmente usar armas de fuego con sus respectivas municiones, destinadas para la práctica deportiva.

Requisitos para el porte que les permite legalmente usar armas de fuego con fines deportivos

La normativa interna de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada, exige los siguientes requisitos:

- Planilla de Solicitud del Permiso de Porte de Armas.
- Dos (02) fotografías recientes a color, tamaño 5 x 5 cm., de frente, en traje formal, fondo blanco, sin lentes y sin sombrero (no engrape las fotos).
- Carta de Residencia expedida por la Primera Autoridad Civil de su localidad.
- Comunicación de la Federación Venezolana de Tiro (FEVETI) recomendando la autorización para el porte de

arma de uso deportivo e informando el tipo de arma y modalidad de tiro a ser utilizada. - Cédula de identidad a 150% de ampliación laminada y vigente. - Planilla de pago de Impuestos Fiscales (SENIAT, forma 16), debidamente cancelada. Dos (02) unidades tributarias por arma y por año de permiso. - Fotocopia del Carnet de la Federación Venezolana de Tiro y de la Asociación o Liga de Tiro a la cual pertenece, vigente y por ambos lados. - Fotocopia de la factura o documento que acredite la propiedad del arma y si el arma es asignada anexar un comprobante.

Porte de uso comercial o de trabajo

Es el permiso otorgado a empresas jurídicas, legalmente les permite tener, manipular y usar armas de fuego, con sus respectivas municiones en inmuebles habitacionales, comerciales o de trabajo, delimitándose su uso según las restricciones contenidas en leyes códigos y reglamentos vigentes de la Jurisprudencia Venezolana, siendo los requisitos para obtener el porte: Dos (02) fotografías recientes a color, tamaño 5 x 5 cm., de frente, en traje formal, fondo blanco, sin lentes y sin sombrero; Planilla de solicitud de permiso de Porte de Armas; Constancia de Trabajo o Registro Mercantil; Carta de Residencia expedida por la primera Autoridad Civil de su localidad; Dos (02) referencias personales, donde indique la dirección de habitación, trabajo, teléfono de ubicación y fotocopia de la cédula de identidad del referente; fotocopia de la cédula de identidad a 150% de ampliación laminada y vigente; carta de exposición de motivos; planilla de pago de impuestos fiscales (SENIAT, forma 16), debidamente cancelada; dos (02) unidades tributarias por arma y por año de permiso; fotocopia de la factura o documento que acredite la propiedad del arma; si el arma es asignada, enviar la respectiva constancia o comprobante; y el certificado de haber aprobado el curso básico de manipulación, manejo y tiro, cuya vigencia será de cinco (05) años.

Porte de armas para usar escopetas

Es otorgado a civiles o personas naturales, y les permite legalmente usar escopetas y sus respectivas municiones en zonas rurales y urbanas.

Requisitos para el porte de escopetas

Los requisitos son los que a continuación se mencionan:

- Llenar la planilla de solicitud de permiso de Porte de Armas.
- Incluir dos (02) fotocopias recientes a color, tamaño 5 x 5 cm., de frente, en traje formal, fondo blanco, sin lentes y sin sombrero.
- Anexar constancia de trabajo o Registro Mercantil.
- Anexar fotocopia de la cédula de identidad a 150% de ampliación laminada y vigente.
- Anexar en original Carta de Residencia expedida por la Primera Autoridad Civil de su localidad.
- Anexar en original dos (02) referencias personales, donde indique la dirección de habitación, trabajo, teléfono de ubicación y fotocopia de la cédula de identidad del referente ampliada a 150%.
- Anexar planilla de pago de Impuestos Fiscales (SENIAT, forma 16), debidamente cancelada. Dos (02) unidades tributarias por arma y por cinco (05) años de permiso.
- Anexar la copia de la factura de compra del arma, permiso anterior u otro documento que acredite la propiedad de la escopeta.

Ahora bien, una vez reseñado todo lo referente a los tipos de portes y requisitos, exigidos por la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, se pasará a explicar las disposiciones contenidas en el Código Penal Venezolano vigente, referente a las armas de fuego.

Disposiciones del Código Penal Venezolano Vigente

Se encuentra consagradas en el Título V, de los delitos Contra el Orden

Público, Capítulo I, referido al tema de la importación, fabricación, comercio, detención y porte de armas; en donde el autor analizará los artículos referidos a esta materia para el desarrollo de la investigación, iniciando con el artículo 273, el cual expresa que:

Se consideran delictuosos y serán castigados conforme a los artículos pertinentes de este Capítulo, la introducción, fabricación, comercio, detención y porte de armas que se efectúen en contravención de las disposiciones del presente Código y de la Ley sobre Armas y Explosivos.

El mencionado artículo, explica que serán castigados por medio de las leyes correspondientes todo lo referente a comercio, detención, y porte de armas que se realicen de manera ilegal, es decir, no cumpliendo con los requisitos dictados y expresados en los contenidos de la legislación patria.

Por otra parte, en el artículo 274 expresa que son armas en general, todo instrumento propios, para maltratar o herir a personas en distintos hechos, y se consideran como tales los que se citen en la Ley sobre Armas y Explosivos.

Ahora bien, en cuanto a la importación, fabricación, porte, detención, suministro u ocultamiento de las armas clasificadas como de guerra, según la ley citada en el artículo 273 y demás disposiciones legales concernientes a la materia, se castigarán con pena de prisión de dos a cinco años, ya que el único poseedor o usuario de las armas de guerra es el Estado venezolano.

Es así como en el artículo 276 explica

No incurrirán en la pena prevista en el artículo anterior los que posean colecciones de armas consideradas como objetos históricos o de estudio, siempre que para formar, conservar o enajenar dichas colecciones se ciñan a los Reglamentos que dicte el Ejecutivo Nacional.

En similares términos, el artículo 280 del mismo código, establece:

No incurrirán en las penas establecidas en los artículos 278 y 279 los militares en servicio, los funcionarios de policía, los resguardos de aduanas y demás empleados públicos que estuvieren autorizados para tenerlos o portarlas por las leyes o reglamentos que rijan el desempeño o servicio de sus cargos.

De la norma expuesta se desprende que no se establecerán los castigos a todas aquellas personas que en el ejercicio de su labor se les autorice el porte de armas.

Así mismo, el artículo 281: del Código Penal venezolano, dispone: “Tampoco incurrirán en las penas previstas en los artículos anteriores los ciudadanos a quienes el Ejecutivo Federal autorice expresamente a portarlas conforme a las leyes y reglamentos sobre la materia”.

De lo antes expresado, se deduce que los ciudadanos que el Ejecutivo Federal les autorice o les confiera el porte de armas, rigiéndose por las leyes y reglamentos, correspondiente a las armas, no incurrirán en las sanciones o violaciones de las normas, como es el caso de los artículos 278 que tipifican el Porte Ilícito de Armas de Fuego.

Aspecto de especial relevancia, lo constituye el dispositivo del artículo 282 del Código Penal venezolano, que expresa:

Las personas a las que se refieren los artículos 280 y 281, no podrán hacer uso de las armas que porten sino en caso de legítima defensa o de defensa del orden público. Si hicieren uso indebido de dichas armas, quedarán sujetas a las penas impuestas por los artículos 278 y 279, según el caso, además de las penas correspondientes al delito en que usan dichas armas hubieren incurrido.

Conforme al artículo citado, Jiménez (1998), define la legítima defensa:

Como la repulsa de la agresión legítima, actual o inminente, por el atacado o terceras personas, contra el agresor, sin traspasar la

necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla, también debe considerarse los requisitos para que sea legítima defensa; que se haya producido una agresión, que sea ilegítima, que sea actual e inminente, que el agredido se defienda, que la defensa sea de la persona ofendida (p. 272)

En este orden de ideas, el artículo 283 del Código Penal venezolano, establece que no incurrirán en las penas impuestas en los artículos 277, 278 y 279 los poseedores de armas que los hubiere empadronado de conformidad con la Ley sobre Armas y Explosivos, siempre que posteriormente no les hayan dado un destino contrario a las disposiciones de dicha ley.

Ahora bien, el Código Penal legisla sobre la faltas que se refieren a armas o materias explosivas en sus artículos 511 al 518. Es así como el artículo 511 dispone:

El que sin previo permiso de la autoridad competente, haya establecido una fábrica de armas y municiones de libre comercio, o que sin sujetarse a las prescripciones legales sobre la materia, introduzca en la República más de las que fueren permitidas, serán penado con arresto hasta por tres meses o con una multa de Cincuenta a Mil bolívares.

Conforme al artículo citado, se infiere que la persona que haya establecido en el país fabrica de armas sin estar regulados por las normas correspondientes a la materia tendrá un castigo de pena o multa, arresto hasta por noventa (90) días.

Por su parte, el artículo 513 expresa que el que, sin permiso previo de la autoridad competente, venda o ponga en venta armas de lícito comercio para cuyo expendio se requiere tal permiso, será penado hasta con un (01) mes de arresto.

La explicación del artículo citado o mandato, es obtener el permiso

competente para poder comercializar con armas de fuego en la Legislación Venezolana, de allí pues, que el artículo 514 del Código Penal Venezolano reseña que será penado con multa hasta de mil bolívares todo individuo que, aún con permiso de la autoridad para llevar armas de fuego:

- Haya entregado o dejado llevar cargadas las susodichas armas a una persona menor de Catorce años o a cualquier otra persona que no sepa o no pueda manejarlas con debido discernimiento.
- Haya descuidado las precauciones suficientes para evitar que las personas indicadas se apoderen fácilmente de tales armas.
- Haya llevado un fusil cargado en medio de una reunión o concurso del pueblo.

Por último, el artículo 515, del Código Penal venezolano, consagra que el que sin permiso de la autoridad competente, hubiese descargado armas de fuego o hubiese quemado fuegos artificiales o aparatos explosivos o bien hiciere otras explosiones peligrosas o incómodas en un lugar habitado, en su vecindad, o a lo largo en dirección de una vía pública, será penado hasta con doscientos bolívares de multa, y en los casos más graves podrá imponerse arresto por un mes.

De lo antes señalado del Código Penal se entiende, que la persona que hubiere detonado un arma de fuego, en su comunidad o zonas pobladas, se le impondrá un castigo, con multa y arresto en casos más graves, heridos, muertos a causa de disparos.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS A LAS ARMAS DE FUEGO PREVISTAS EN LA LEY SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS EN VENEZUELA

Consideraciones Previas

Antes de proceder a analizar las disposiciones de la Ley Sobre Armas y Explosivos, especialmente las que describen los tipos de armas de fuego, el autor de este trabajo de investigación, considera necesario realizar las siguientes observaciones.

Cabe destacar, que en los últimos diez años, debido al auge de la violencia, y hechos delictivos, que existen en Venezuela, resultado de la proliferación de armas de fuego, a las cuales han recurrido los individuos de las distintas clases sociales para defenderse, o porque se sienten indefensos, ha surgido la necesidad de revisar los instrumentos jurídicos que regulan el uso de las armas de fuego.

De allí pues, debido a los distintos problemas que trascurre en la sociedad, como delincuencia, porte ilícito de armas, y la violencia con que se cometen los hechos delictivos por el uso indiscriminado de éstas, surge en la legislación venezolana un instrumento jurídico, que junto con la Ley sobre Armas y Explosivos, su reglamento y el Código Penal Venezolano tiene por objeto el desarme de la ciudadanía por el porte y tenencia libre de dichos instrumentos, como es la Ley para el Desarme de fecha 20 de Agosto de 2002, la cual en su artículo 1, expresa lo siguiente:

Esta ley tiene por objeto el desarme de las personas que porten, detenten u oculten armas de fuego de manera ilegal, a los fines de salvaguardar la paz, la convivencia, la seguridad ciudadana y de las instituciones, así como la integridad física de las personas y de sus propiedades.

Cabe destacar, que de la cita precedente, la Ley para el Desarme, explica de forma clara su función como es la de ejercer el desarme de las personas que de manera ilegal, es decir, que no hayan cumplido con las leyes correspondientes para la obtención del permiso, tengan en su poder armas de fuego, con fines distintos para los cuales están destinados éstas, que no es otro que el de preservar la integridad física de quien la porta, y en el caso de los funcionarios de seguridad encargados de velar por el orden público, para preservar dicho orden.

En este particular la presente Ley es muy determinante y contempla de forma clara y expresa la actividad que debe desarrollarse, la cual persigue únicamente el desarme de las personas que porten, detenten u oculten armas de fuego de manera ilegal, lo cual desde el punto de vista práctico y según el criterio personal del investigador resulta de cierta dificultad.

Ello en virtud, que para los funcionarios encargados de practicar dicho procedimiento, es una situación que va más allá del texto de la ley, ya que se trata de una actividad de alto riesgo incluso para sus vidas, en el cumplimiento de un deber.

Por otra parte, la misma ley en el contenido de su artículo 2 dispone que:

La Fuerza Armada Nacional, es la institución competente para reglamentar y controlar el desarme de las armas de fuego ilegales, a cuyo efecto podrá requerir la colaboración de los órganos de seguridad ciudadana y de los policías estatales y municipales.

De allí pues, que dicha ley señala además el organismo competente para controlar el desarme a las personas que detenten armas de fuego ilegales, el cual es la Fuerza Armada Nacional con la colaboración de policías, tanto estatales como municipales.

Desde otra perspectiva, el artículo 3 expresa que: “Son armas de fuego

ilegales las que no estén registradas en la Dirección de Armamento Nacional”.

Es así como la Ley para el Desarme, toma como armas de fuego ilegales las que no sean evaluadas o inscritas en la Dirección de Armamento Nacional, siendo que es esta institución la competente para otorgar los permisos de porte y tenencia de armas de fuego, tal como se expresó en el capítulo II de este trabajo de investigación.

En este mismo orden, el investigador señala que esta ley según el dispositivo del artículo 6, establece ciertas circunstancias que deben observarse rigurosamente, así dicho artículo señala:

Todas las armas de fuego ilegales deben ser retenidas y enviadas a la Dirección Nacional, previo levantamiento de una acta en la cual el órgano o lo actuante dejará constancia de las circunstancias de la retención y de las personas involucradas si fuere el caso...

De esta manera, el mencionado artículo dispone, que la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, una vez que reciba las armas de fuego ilegales deberá proceder de la manera siguiente:

1. Las armas de fuego con pena de comiso o retención definitivamente firme serán destruidas en acto público, con excepción de las armas de guerra.
2. Las armas de fuego solicitadas o requeridas por autoridades de la República, quedarán en depósito hasta que la autoridad competente así lo determine.
3. Las armas de guerra que no estén en posesión del Estado, serán decomisadas y pasadas al Parque Nacional.

Es así, como el artículo antes expresado, explica que las armas que sean de fuego, pero que no estén registradas en la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, deben ser retenidas, por los órganos competentes, el

cual deberá dejar constancia, el motivo de retención y de las personas que se involucren en el caso, enviadas a la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional y cumplir con el procedimiento previamente establecido o expresado en el artículo anteriormente mencionado.

Por otra parte, la misma ley expresa de forma categórica en el contenido del artículo 7° que:

Quien posea armas de fuego debidamente autorizadas, será responsable de la guarda de las mismas y no podrá efectuarles modificaciones sin la previa autorización de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional.

Es así como en este sentido, se aclara que la persona que esté debidamente autorizada para portar o tener armas de fuego en su poder, serán las únicas responsables del cuidado de las mismas, en no dejarlas en sitios públicos no dejarlas utilizar por personas que no estén capacitadas para el porte y uso, a su vez no podrá hacerle cambios a las armas sin la previa autorización de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional.

Siguiendo el orden precedente, el investigador considera oportuno destacar el nivel de colaboración que el legislador otorga a los medios de comunicación, quienes conforme al dispositivo del artículo 9° de esta Ley les concede lo siguiente:

Los medios de comunicación social, audiovisual, impresos, u otros, deberán colaborar con el objeto de esta ley, difundiendo programas educativos y campañas para el desarme, igualmente, se solicitará la colaboración de las iglesias, gremios, profesionales y empresariales, sindicatos, centro educativos, organizaciones no gubernamentales y también otros sectores de la sociedad, de conformidad con los artículos 108 y 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Es así conforme al artículo antes mencionado, explica que todos los medios de comunicación que existan en la República Bolivariana de Venezuela, está en la obligación de prestar colaboración de dictar programas educativos para el desarme de la ciudadanía, de igual forma las iglesias, gremios profesionales y empresariales deberán prestar ayuda para el desarme de los ciudadanos o población civil, que estén armados de manera ilegal.

De allí pues, surgen los artículos de la Ley para el Desarme, referente a las prohibiciones y sanciones, así, el artículo 10, dispone que:

Queda prohibido el porte de armas de fuego en los siguientes casos: 1. En reuniones o manifestaciones públicas, marchas, huelgas, mítines y elecciones. 2. En sitios públicos de consumo de bebidas alcohólicas. 3. En estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de este artículo no es aplicable a los miembros de las Fuerzas y Armadas Nacionales, a los órganos de seguridad ciudadana ni a los policías estatales y municipales, en ejercicio de sus funciones.

Es así como el artículo 10 dispone la prohibición del permiso de tenencia de armas de fuego, en manifestaciones públicas, en lugares de bebidas alcohólicas o cuando la persona se encuentre en estado de embriaguez o drogado.

De igual forma dicta una excepción para los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y a los policías tanto municipales como estatales en el ejercicio de sus funciones; por lo cual conviene destacar que el artículo 12 expresa lo siguiente:

Quien porte armas de fuego sin haber dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 de la ley mencionada, será sancionado con una multa equivalente a veinte unidades tributarias (20 U.T.). Además se le retendrá el arma y solo le será devuelta una vez

actualizado o renovado el permiso de porte de armas y cancelada la multa impuesta.

De esta manera, la persona que porte arma de fuego sin cumplir con el artículo 14 de la Ley para el Desarme, el cual contempla que una vez entrado en vigencia la Ley, las personas tanto civiles o naturales deberán dirigirse a la dirección de Armamento de Fuerza armada Nacional, con el objeto de renovar y actualizar con los requisitos exigidos por la ley correspondiente el permiso de porte o tenencia de armas de fuego.

Ahora bien, ante todo lo mencionado cabe destacar, que la Ley para el Desarme va a servir de ayuda para la solución de uno de los problemas o conflictos que confronta la Nación, como lo es el porte y el uso indiscriminado de las armas de fuego por la ciudadanía, así mismo hace más restringido los requisitos para obtener la permisología de porte de armas de fuego y cumplir con su función principal, que es la de desarmar a la ciudadanía o población que detente armas de fuego ilegales, que conlleva a cometer hechos delictivos.

Es importante señalar, que a la par de la Ley para el Desarme, está el Código Penal venezolano vigente, el cual como se expresó en el capítulo anterior, tipifica como delictiva una serie de conductas que alteran el orden público, es decir, el orden social. El derecho positivo, aún sin precisar cuál sea el bien jurídico atacado por ellos, forma una categoría especial de delitos. Tales delitos como lo afirma Grisanti (1998) en su obra *Manual de Derecho Penal Parte Especial* “podría decirse que son de alarma colectiva” (p. 975), y están agrupados dentro de la categoría de delitos contra el orden público. (p. 975).

Orden en sentido material como lo señala Maldonado (1988) en su obra *Uso de las Armas y Causas de Justificación* “es el exigido a los componentes de los distintos grupos humanos en cuanto a sus intercambiables relaciones, se

contrapone al orden ideal establecido y exigido por el derecho vigente”. (p. 90)

En cuanto al orden público, el profesor Posada, citado por Cabanellas (1993) en el Diccionario Jurídico Elemental lo define como “Aquella situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado cuando se desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas, sin que se produzcan perturbaciones o conflictos”. (p. 283)

Tal definición se refiere al orden público administrativo que corresponde al Estado a través de sus órganos competentes de policía y seguridad interna, inherente al derecho administrativo, penal y constitucional. Estas nociones reflejan una mayor referencia al regular el desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos, más que a la integridad del sistema normativo del Estado.

En atención a ello, el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho a la seguridad de los ciudadanos, la cual está dirigida a proteger principalmente a éstos frente a la delincuencia, por cuanto ésta constituye un factor desestabilizador de la sociedad, en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que afecten o comprendan una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de los individuos, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de respetar la dignidad y derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte de los funcionarios policiales y de seguridad estará limitado por los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad conforme a la ley.

De tal manera que, los delitos contra el orden público suscitan alarma en

la colectividad, es la imprescindible presencia de este efecto, lo que el legislador tomó en consideración para agruparlos en esa clase especial, siendo delitos que no recaen sobre ningún bien jurídico determinado; se les reprime no porque se lesione ese ideal orden público, sino porque al producir su efecto, como es la alarma colectiva, atacan el derecho a la tranquilidad que todos los ciudadanos tienen, y en consecuencia, desaparece la paz social.

Por esta razón, los delitos contra el orden público, no son susceptibles de clasificarse en vista del bien o interés lesionado o atacado, sino en razón de la perturbación que producen.

Reforma del Código Penal en Cuanto a los Delitos Contra el Orden Público (Octubre, 2000)

Ahora bien, el Código Penal Venezolano, en el libro segundo, título V, capítulo I, enumera una serie de conductas perturbadoras del orden público dentro de las cuales se destacan la importación, fabricación, comercio, detentación y porte de armas; tales disposiciones fueron objeto de reforma el pasado 20 de octubre según Gaceta Oficial N° 5.494, extraordinario, a los fines de adecuarlas a la realidad social que vive el país, ante el aumento delictivo, y el uso indiscriminado de armas, particularmente las de fuego, por los funcionarios policiales en la prevención del delito.

Ello en función que la disciplina jurídica de las armas en su función específica y fundamental, está dirigida a prevenir aquellos hechos que puedan ocasionar daños o crear una situación de peligro para la seguridad pública. En este sentido como lo expresa Maldonado (2001), “El uso eventual de las armas para cometer delitos contra las personas, es sólo una de las posibles consecuencias de la inobservancia de las prescripciones legales”. (p. 47).

Clasificación de las Armas de Fuego de Acuerdo con la Ley Sobre Armas y Explosivos

La Ley Sobre Armas y Explosivos clasifica las armas en cuatro especies, a saber: a) Armas de Guerra, b) Armas Prohibidas, c) Armas de Cacería y d) Armas de uso doméstico, industrial y agrícola.

Armas de Guerra

Conforme al artículo 3 Ley Sobre Armas y Explosivos, son armas de guerra los cañones, obuses, morteros, ametralladoras, fusiles, carabinas, mosquetones, revólveres y pistolas de largo alcance y, en general, todas aquellas que pudieren ser útiles en la guerra, con sus respectivas municiones y aparejos. Por su parte, el artículo 275 del Código Penal prescribe, que la importación, fabricación, porte, detención, suministro u ocultamiento de este tipo de armas se considera delito y se castigarán conforme a la pena en él señalada.

Cabe destacar, que este tipo de armas lo puede usar el ejército, la Guardia Nacional y demás cuerpos de seguridad para la defensa de la nación y en resguardo del orden público.

Con respecto a las Armas de Guerra, los artículos 276 y 277 del Código Penal y el 4, 5, 6 y 7 de la Ley sobre Armas y Explosivos, son contestes al disponer las siguientes consecuencias:

1. Todas las armas de guerra así como su respectivas municiones, aparejos y útiles que se introduzcan, encuentren o fabriquen en el país pertenecen a la nación.

En relación al régimen de las armas de guerra, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece al igual que la del 61, la reserva absoluta al Estado sobre la propiedad, importación y fabricación de las mismas.

2. Solo el Gobierno Nacional puede establecer en el país fábricas de armas y municiones de guerra.
3. No podrán introducirse en el país tales armas ni municiones, sino por cuenta del Gobierno Nacional y a éste compete dictar todas las medidas conducentes a la recolección de las armas de guerra que se encuentren fuera del Parque Nacional.

En este sentido, el artículo 324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “Solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en el país, pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso”...

De lo anteriormente expuesto, se evidencia cómo se regula la confiscación de las armas de guerra sin indemnización ni proceso alguno, norma de tanta gravedad por cuanto como lo asegura Rondón (2000) en su obra *Análisis de la Constitución Venezolana de 1999*:

La confiscación es el desconocimiento del derecho de propiedad de una cosa que se realiza mediante la disposición del titular del bien en forma coactiva... sin embargo para que sea legítima la traslación activa se requiere el pago de un precio como indemnización... esta situación de quebrantamiento de los derechos del individuo sin que medie indemnización alguna, solo se permite cuando se trata de cosas cuya peligrosidad atentan contra la seguridad del Estado y de la Sociedad, como son las sustancias prohibidas, los objetos utilizados para perpetrar delitos o los instrumentos y materiales particularmente peligrosos por la posibilidad de que se produzcan daños irreparables. (pp. 260 – 261)

En este orden de ideas, el artículo 8 de la Ley sobre Armas y Explosivos establece como excepción que no incurrirán en las penas establecidas por los hechos delictivos anteriormente señalados, las personas que posean colecciones de armas consideradas como objetos históricos o de estudios,

siempre que para formar, conservar o enajenar tales colecciones se ciñan a los reglamentos que a tal efecto dicte el Ejecutivo Nacional.

Por su parte, el artículo 7 ejusdem remite al Código Penal en cuanto al castigo y aplicación de las penas por la importación, fabricación, porte entre otros, de armas aparejos y municiones de guerra por particulares.

Por último, el requisito esencial para la calificación de armas de guerra está determinado por el largo alcance de las mismas.

Armas Prohibidas

De acuerdo al contenido del artículo 9 de la tantas veces mencionada Ley Sobre Armas y Explosivos, se consideran armas prohibidas; las escopetas de repetición o que usen cañones rayados para balas razas, revólveres y pistolas de toda clase y calibres, bastones-pistolas, flowers, puñales, dagas, estoques, cuchillos y machetes que no sean de uso doméstico industrial o agrícola.

El Código Penal en el artículo 277 expresa:

El comercio, la importación, la fabricación y el suministro de las demás armas que no fueren de guerra, pero respecto a las cuales estuvieren prohibidas dichas operaciones por la Ley sobre Armas y Explosivos, se castigarán con pena de prisión de cinco a ocho años.

Sobre este tipo de armas se prohíbe el comercio, importación y el suministro; por remisión expresa del artículo 10 de la Ley Sobre Armas y Explosivos.

Así mismo, la mencionada ley, en el artículo 21 consagra:

El Ejecutivo Federal podrá, cuando lo juzgue conveniente, y previa presentación de fianza personal por el interesado, autorizar a una persona para importar un arma de fuego que no será nunca de las de guerra enumeradas en el artículo 3 de esta Ley, y siempre que su importación y el uso a que se destine, se haga de acuerdo con los Reglamentos que aquél dicte sobre la materia. En todo caso, se

entiende que la autorización concedida podrá ser revocada cuando lo tenga a bien el Ejecutivo Federal, quien, llegado el caso, recabará el arma respectiva y sus municiones, con destino al Parque Nacional.

Parágrafo Único: Por ningún respecto se autoriza para importar y hacer uso de las armas de fuego a que se refiere este artículo, a personas de comprobados antecedentes criminales, o de carácter pendenciero o de males costumbres.

De lo expuesto anteriormente, significa que el Ejecutivo Federal (hoy Nacional) podrá, cuando lo juzgue conveniente, previa presentación de fianza personal por el interesado, autorizar a una persona a para portar y usar armas de este tipo, siempre y cuando este individuo no registre comprobados antecedentes criminales, sea de carácter pendenciero, o de malas costumbres.

Armas de Cacería

Son armas de cacería aquellas destinadas especialmente para cazar como es el caso de las escopetas. En este sentido el artículo 11 de la LSAE, dice:

Se podrán importar y expender, previa autorización del Ejecutivo Federal, conforme a los reglamentos que dicte sobre la materia, las escopetas de cacería de uno o dos cañones lisos de un solo tiro o de repetición, en los calibres de 12 a 32, inclusive, y los flangers de cañones lisos comprendidos entre 9 y 14 mm, para usar cartuchos de cartón.

Armas de Uso Doméstico, Industrial y Agrícola

Se consideran armas de uso doméstico, industrial y agrícola los cuchillos y machetes apropiados para esos usos.

En cuanto al uso de estas armas, el artículo 25 de la *Ley Sobre Armas y Explosivos*, establece que no debe considerarse delito de porte ilícito de armas el hecho de llevar los dueños, mayordomos, caporales o peones de haciendas, granjas, o establecimientos agrícolas o pecuarios, los machetes, cuchillos o instrumentos de este tipo, necesarios para el cultivo o explotación, siempre que

su porte y uso se efectúen solamente en viaje a lugares de trabajo y durante la permanencia en éstas.

Sin embargo, el porte de tales armas en las poblaciones, espectáculos públicos y reuniones, y su detención se castigará de conformidad con el Código Penal. Este tipo de armas también podrán ser portadas por excursionistas, cazadores y exploradores, durante su viaje y permanencia en los lugares que hayan elegido al efecto.

Ahora bien, después de haber definido, clasificado y revisado la normativa legal que regula el uso de las armas, es preciso señalar que el legislador venezolano con miras a resguardar el orden público, legitimó el uso de las armas por parte de los funcionarios policiales del Estado en la prevención del delito.

Partiendo de la premisa constitucional del artículo 55 anteriormente citado, el cual expresa que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas y los demás derechos consagrados en su favor, y que tal función corresponde primeramente a los funcionarios policiales, el mismo texto constitucional y la Ley Penal sustantiva han limitado el uso de las armas por parte de estos funcionarios policiales y demás cuerpos de seguridad, los cuales podrán hacer uso de las mismas solo en legítima defensa o en resguardo del orden público.

Ahora bien, los funcionarios policiales encargados de velar por la seguridad y el orden público, así como los demás órganos de seguridad están facultados para usar armas en la prevención del delito.

En este sentido, el artículo 22 de la ley sobre armas y explosivos y su reglamento exceptúa de la prohibición de porte de armas a los militares en

servicio, los empleados de los resguardos nacionales e inspectorías y fiscalías de rutas nacionales, los funcionarios y agentes de la Guardia Nacional, de investigación, de policía y demás cuerpos de seguridad, los cuales portarán las que autoricen los reglamentos de sus servicios, o las órdenes e instrucciones de sus supervisores.

En concordancia con el citado artículo, el Código Penal Venezolano en el artículo 280 preceptúa:

No incurrirán en los delitos y penas establecidos en los artículos 278 y 279 los militares en servicio, los funcionarios de policía, los resguardos de aduanas, ni los funcionarios o empleados públicos que estuvieren autorizados para tenerlas o portarlas por las leyes o reglamentos que rijan el desempeño de sus cargos.

Los delitos tipificados en los artículos 278 y 279 ejusdem son el porte, detención y ocultamiento de armas prohibidas, así como también la confiscación de armas. De tal manera que quedan exceptuados de la prohibición de porte de armas los funcionarios indicados en el artículo 22 de la ley sobre armas y explosivos y su reglamento.

En relación al uso de las armas de fuego por los cuerpos policiales, se observa que el Estado Venezolano a los fines de planificar y desarrollar sus variadas actividades fundamentadas en los principios de la Constitución, ha previsto la aplicación de una serie de medidas administrativas policiales reguladas en las leyes para que tales fines se puedan cumplir.

Con base a estas normas, el Estado impone a los individuos deberes y obligaciones que hacen surgir en ellos comportamiento de hacer o no hacer determinada conducta.

En consecuencia, como lo señala Maldonado (1997) en su obra *Uso de las Armas y Causas de Justificación en el Derecho Penal Común y Militar*

Venezolano, “los individuos tienen que cumplir los deberes impuestos comportarse de determinada manera, cumplir con los reglamentos policiales, con los mandatos judiciales y demás disposiciones del orden en los límites impuestos por las autoridades competentes. (p. 127)

Claro está, si todas estas órdenes, mandatos y disposiciones se cumplen, el Estado habrá mantenido el orden. Sin embargo, sucede que muchas veces las autoridades del Estado ven frustradas sus disposiciones y tropiezan con obstáculos creados por variadas e irregulares conductas de los hombres. Estas conductas y disturbios de grupos impiden el normal desenvolvimiento de las actividades estatales creando una alteración del orden social, político y económico, por lo que el Estado investido de soberanía y de acuerdo a los principios que rigen el derecho constitucional, se ve en la necesidad de aplicar medidas de carácter administrativo y judicial, para asegurar el orden y la tranquilidad.

Es aquí donde entra en juego el uso de las armas previstas en el Código Penal, la Ley Sobre Armas y Explosivos y la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Una vez que se hacen ineficaces las medidas preventivas y ejecutivas puestas en prácticas con la cualidad de órganos competentes, recurren al uso de las armas y a otras medidas de fuerza a los fines de hacer eficaz la intervención policial.

El uso de las armas y de otros implementos equiparables a las armas de fuego, por sus efectos de producir lesiones, son medidas de coacción física material y directa contra las personas, la cual debe ser puesta en marcha atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte, el Código Penal Venezolano en el artículo 282 expresa que

los funcionarios de policía, los militares en servicio, los resguardos de aduana o los funcionarios o empleados públicos que estuvieren autorizados para portarlas, no podrán hacer uso de estas armas sino en caso de que concurra una causa de justificación conocida como legítima defensa, o en defensa del orden público, pues si actúan en contravención a lo expresado anteriormente, quedarán sujetos a las penas correspondientes al delito ejecutado, así como también serán responsables por el delito de uso indebido de armas.

Tipifica de igual manera la Ley Penal sustantiva el porte, detención, ocultamiento y fabricación de armas, por cuanto en tales disposiciones el legislador ha sido decisivo de que estos actos constituyen delitos de peligro directo e inmediato contra la sociedad y no una simple violación de preceptos de prevención, por lo que es de apreciarse que en estas disposiciones las sanciones previstas tienen carácter represivo.

Políticas del Estado para el Desarme y la Violencia

Es así, como el Gobierno Nacional debido a la delincuencia y violencia con que se cometen hechos delictivos, y la utilización de armas para defenderse, como para usarlas en crímenes, el Estado quiere optar por el plan de seguridad ciudadana, el cual tiene por finalidad abordar la violencia delictiva atendiendo a sus múltiples causalidades y expresiones, así como los planteamientos referentes al control y depuración de las policías u cuerpos de seguridad, el establecimiento de mecanismos ágiles para exigirles mayor eficiencia y la creación de comisiones de coordinación de las labores de la policía e inteligencia. Es también alentador la concepción de una política de seguridad que tiene como principios rectores el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, a través de la creación de canales expeditos para ello, y la prevención, entendida en un sentido amplio e integral.

En este sentido, los ciudadanos tendrán que exigirle al Estado la

instrumentalización de dichas políticas, controladas y vigiladas y sobre todo, atendiendo a la complejidad de las violencias que azotan, imaginar y comprometerse en nuevas posibilidades y modelos de convivencia que actúen como fuerza contraria a la fuerza de las violencias que agreden a la sociedad.

Cabe destacar de esta manera, que en varios países del mundo, inclusive en Venezuela, proliferan iniciativas, mayormente de carácter municipal o local que prohíben la venta de armas de juguete, con el fin de evitar su utilización por parte de delincuentes o bien para que los niños no se familiaricen con su uso, sumado a ello, en algunos lugares se realizan campañas de recolección de juguetes bélicos, apuntando a una concientización contra la violencia.

De allí pues, en el caso del Estado venezolano de Miranda, las autoridades decidieron no permitir la venta de juguete que representen réplicas exactas de armas de fuego. Según informó la agencia de noticias española EFE, “la orden dictada por el Gobernador del Estado, Enrique Mendoza, que prohíbe la producción, distribución y venta de este tipo de juguetes, concede un plazo de quince (15) días a los comerciantes para que retiren las existencias”. La medida de Miranda busca dos objetivos a la vez: o dejar que los niños se habitúen a la utilización de armas, y tampoco que los delincuentes las utilicen simulando armas reales, según señaló una fuente oficial a la prensa nacional, sin embargo, con la sola prohibición no alcanza y es por ello que los autores de la propuesta indican que este tipo de distorsión psicosocial, se ve agravada y potenciada por el alto número de horas que los niños permanecen a una programación televisiva en que la violencia sin límite es uno de sus principales componentes. En este sentido el Estado Venezolano, por medio de la Ley para el desarme de 2002 y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 expresa la colaboración de los medios de comunicación social, escrito, televisivo o por emisoras de radio optar por programas o

campañas educativas para concienciar u orientar a la población civil, las consecuencias negativas por el uso y porte de armas de fuego.

Cabe destacar, otro punto importante para el desarme es controlar el abastecimiento del mercado negro, es una responsabilidad exclusiva del Estado, el deben recuperar dichas armas en manos de la gente librándola de ellas definitivamente y preferiblemente destruirlas o detenerla y llevarla al organismo competente, para así evitar el tráfico libre de las armas de fuego.

Retomando la problemática que originó este trabajo de investigación, el autor concluye que la Ley Sobre Armas y Explosivos de 1939 tiene un criterio muy amplio sobre lo que es un arma de guerra, por lo tanto queda muy poco para incluir armas que no sean de guerra, podrían incautárselas a uno aunque se tratase de piezas de museos, si no tiene el permiso de porte correspondiente.

De igual manera, el concepto de armas de guerra previsto por el legislador en el artículo 3 de la Ley Sobre Armas y Explosivos, es inútil y superflua, porque al exigir el requisito de propiedad de la nación, se está refiriendo a cualquier tipo de armas, por lo demás es de lógica interpretación que las armas de gran potencia o de gran alcance solo tienen aplicación en el cuadro de las Fuerzas Armadas, para su específica misión.

Como se observa, el requisito objetivo y fundamental a que están sometidos los organismos policiales y judiciales es muy simple, pues solo es el reconocer o constatar la impresión sobre el arma de que la misma es propiedad de la Nación, con tal requisito procede la imputación según los casos de porte, uso, detentación y ocultamiento de armas de guerra, previsto en el artículo 275 del Código Penal y 31 de la Referida Ley, claro está que el requisito no será necesario en aquellos tipos de armas o armamento que tienen como única destinación la de ser usados en la guerra.

Tampoco es indispensable ese requisito, en la comprobación de los otros

aspectos sobre armas, que acarrean penas detentivas, como el comercio, la introducción y el ocultamiento de armas, considerados de exclusivo monopolio del Estado.

Es importante señalar, que para algunos autores como Maldonado, (2002), el requisito esencial para la calificación de armas de guerra, está en determinar su largo alcance, el cual debe ser solicitado de manera específica a los peritos o técnicos policiales, en el sentido que emitan una opinión y posterior calificación en relación al arma objeto de la investigación.

Como se observa, valga reiterar que resulta totalmente ambigua la definición de arma de guerras, de conformidad con lo establecido en la Ley Sobre Armas y Explosivos, situación ésta que pueden conllevar a que se originen confusiones, al momento de imputarle este delito a un sujeto de conformidad con lo establecido en el Código Penal venezolano, pues este instrumento jurídico remite al momento de tipificar este hecho punible a la Ley Sobre Armas y Explosivos.

Con ello, resulta vulnerado el principio de legalidad, el cual ha sido instaurado tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en el Código Penal venezolano.

Violación al Principio de Legalidad

El principio de legalidad de los delitos y de las penas, constituye uno de los que conforman el debido proceso, el cual se encuentra expresamente establecido en el artículo 49, ordinal 6° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que expresa: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delito, faltas o infracciones en leyes preexistentes”.

Cabe destacar, que el principio de legalidad cumple una función en todo

estado de derecho, vale decir, dentro de la sociedad la cual se explica como un conjunto de comportamientos humanos orientados a la obtención de fines que guardan relación con su conservación y desarrollo; sin embargo, no todos estos comportamientos se proponen tal finalidad; pues hay algunos que por el contrario, lesionan o ponen en peligro su estabilidad, frente a ellos el Estado garantizador de estos bienes sociales, debe adoptar una política doblemente eficaz, la cual debe estar orientada a prevenirlos para evitar que se menoscabe la integridad del grupo y la de cada uno de sus miembros y a reprimirlos cada vez que se realizan, sin embargo, esta labor no es uniforme ni tampoco mecánica, por cuanto siendo diversa la intensidad de la lesión producida con tales hechos, diverso ha de ser también el tratamiento.

Así, cuando el Estado considera que una conducta humana altera solamente el equilibrio económico entre dos o más individuos o disminuye intereses de valor intrascendente o lesiona apenas levemente breves personales importantes, en una palabra, cuando cree que los intereses de la colectividad que orienta y dirige de acuerdo con la concepción socio-política que lo conforma y nutre, no resultan seriamente menoscabados, entonces busca el equilibrio mediante una regulación normativa de tales comportamientos dentro de un área jurisdicción *ius privatista*.

Cuando en cambio, considera que un hecho pone en riesgo o vulnera valores individuales o sociales importantes, o altera su propia estabilidad, recoge tal comportamiento en normas positivas, prohíbe y respalda la prohibición tácitamente en el contenida, con la amenaza de una sanción severa como es la pena.

Ahora bien, en el campo del derecho penal, toda esta materia se encuentra regida por el principio de legalidad o de reserva legal, el cual se expresa con la conocida máxima del *nullum crimen, nulla pena, sine lege*, ya explicado. Así

mismo el principio de reserva puede ser fundamentado política, científica y filosóficamente.

Por otra parte se debe expresar, que el principio de legalidad representa una garantía que se lleva al máximo al complementarse con la necesidad de órganos especiales para la imposición de la pena y también por la otra exigencia constitucional de que nadie sea condenado sin juicio previo que establezca su defensa y proceda al reproche de culpabilidad.

Por otra parte, tal como lo afirma Arteaga Sánchez (1998) en su obra *Derecho Penal I Parte General* el principio de legalidad:

...constituye un límite al poder público y una garantía de la libertad de los individuos acorde con las ideas democráticas contemporáneas y con el principio axiológico según el cual el hombre es el mayor valor, al servicio del cual están el Estado y la ciencia y el arte y, por ello debe ser rodeado del mayor cúmulo de seguridades posibles. (p.64)

En cuanto a la fundamentación científica de este principio para Feuerbach (citado por Arteaga Sánchez, 1998) en su obra *Derecho Penal I Parte General*, el interés fundamental del Estado es evitar, en general, la comisión de delitos, para lo cual debe actuar preventivamente mediante la coacción física, ya que no sirve ni para prevenir en general los delitos, ni para evitarlos particularmente en la mayoría de los casos, debe servirse de la coacción psicológica a fin de que en los casos de peligro de violación de derechos ejerza un influjo motivador e inhibitorio.

Así mismo Manzini (citado por Mendoza, s/f) en su obra *Curso de Derecho Penal Venezolano* agrega que “...el derecho penal objetivo se fundamenta en los principios de la pre constitución, la certeza y la precisión, en virtud de los cuales sus reglas deben establecerse en forma precisa y para regir hechos futuros y no hechos pasados.” (p.199)

Lo anteriormente expuesto significa, que nadie puede ser sometido con justicia a un castigo legal, si no ha podido tener conocimiento de la ley moral que infringió y del mal social que se origina de su infracción, porque el hombre es absolutamente libre de hacer todo lo que la ley moral no prohíbe, y la justicia social no puede tener una prueba segura de tal conocimiento mas que en la preexistencia y publicación de la ley respectiva la cual revela al mismo tiempo, la regla moral, la prohibición política y la pena legal.

Por otra parte, la sociedad tienen el deber de prevenir los delitos por todos los medios legítimos y convenientes que tenga en su poder, antes de acceder al remedio extremo de la pena, y si el legislador guardase silencio, si no configurase los delitos y las penas, se perdería la impresión que puede causar la publicación de la ley penal, como medio de esparcir la instrucción y el temor.

Es importante señalar que aún en el terreno de la filosofía, se ha fundamentado el principio de legitimidad como lo afirma Mendoza (s/f) en su obra *Curso de Derecho Penal Venezolano*, como “...una restricción lógica...” (p. 199), en consecuencia, no hay igualdad entre delito y pena por cuanto estos no son idénticos, en resumen el principio en estudio ha sido concebido en la teoría general del derecho bajo los siguientes puntos de vista; el de la retroactividad, el de la prohibición de analogía, la inadmisibilidad de la costumbre, la imposibilidad de un reglamento contentivo de reglas creadoras de delitos y penas, y el de exclusivismo de la ley penal.

Ahora bien, como se señaló anteriormente la tipicidad se fundamenta en el principio de legalidad de los delitos y de las penas, en consecuencia ésta no es un invento inútil ni constituye una palabrería sin mayor utilidad en la practica forense, al contrario, encarna uno de las más valiosos aportes que el siglo pasado le hizo a la teoría del delito.

De allí, que los modernos doctrinarios están de acuerdo en señalar que el

fenómeno de la tipicidad ejerce una triple función, garantizadora, fundamentadora y sistematizadora, además está íntimamente vinculada al cuerpo del delito y tiene un valor procesal muy significativo.

Con respecto a la función garantizadora se debe indicar, que la tipicidad constituye una garantía jurídica, política y social de la propia libertad. Estas normas conforman el sistema político que permite garantizar la libertad y seguridad individual por cuanto se establecen los principios que según Febres (1996) *Curso de Derecho Penal*:

Han de servir de defensa al individuo contra los ímpetus de la autoridad, o las mallas que del procedimiento legal suelen unirse con la apariencia de medios que amparan la defensa, pero que dejan al individuo a merced del juzgador sin prueba confrontada, sin arma contra el testigo apasionado o perjuro, sin voz de vindicación, y víctima en ocasiones de la delación embustera o perversa de un enemigo. (p.37)

Significa que la tipicidad protege la seguridad jurídica por cuanto ésta constituye según Reyes (1993) en su obra *La Tipicidad*:

...el conjunto de condiciones que atañen a la esencia misma del derecho y por medio de las cuales los integrantes de un grupo social determinado conocen los carriles en que deben encauzar sus conductas y las consecuencias que el apartamiento puede acarrearles”; resulta evidente que la seguridad jurídica es uno de los elementos de la idea del derecho, junto con la justicia y la adecuación a un fin. (p.40)

En este sentido, es necesario recordar a continuación, los caracteres de la ley penal, a saber:

1. Exclusividad: La ley penal es exclusiva porque solamente ella crea delitos y establece penas, rige en esta materia el principio de legalidad, el cual constituye una verdadera garantía de libertad para quienes no infringen la

norma y que emana de las garantías acordadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De esta manera, la costumbre no puede crear delitos por más que los integrantes de la colectividad crean que un acto es delito, si no está previsto en la ley penal, no acarrea sanciones penales.

2. Obligatoriedad: La ley penal debe ser acatada por todos, nacionales, extranjeros, funcionarios, particulares, según dispone el derecho común. Así lo señala Jiménez (1981) *La Ley y El Delito* “La norma obliga a todos los que habiten en el territorio sobre el que se ejerce su imperio y la ley se destina a la autoridad, puesto que, aunque suene a paradoja, el delincuente más bien encauza su conducta en la ley que lo vulnera” (p.93).

No puede ningún habitante o transeúnte de la República, alegar el desconocimiento de la ley por cuanto esto no le quita imputabilidad al sujeto, ya que si el acto se produjo de manera consciente, se configuró un hecho punible y en nada lo invalida el que se ignore la norma jurídica transgredida, pues el artículo 60 del Código Penal venezolano vigente establece que: “La ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta”.

3. Ineludibilidad: Es ineludible la ley porque rige mientras no sea derogado por otra ley, conforme al principio de derecho común consagrado en el artículo 7 del código civil que dice “Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes, y no vale alegar contra su observancia el desuso ni la costumbre o practica en contrario, por antiguas o universales que sean”.

4. Igualitaria: Ello por cuanto, según el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se garantiza a los habitantes de la República la igualdad ante la ley, en el sentido de que ninguna situación personal puede fundar una diferencia en casos iguales, esto no niega a la ley penal su característica de adaptarse a cada una de las circunstancias, ocasiones,

móviles y características subjetivas del delito y del autor.

5. Constitucional: Como toda ley, la penal es constitucional porque si colida con esta no tiene efecto, el ordenamiento jurídico venezolano establece la supremacía de la Carta Magna.

Los caracteres anteriormente expuestos ratifican la importancia que en el campo del derecho y muy especialmente del derecho penal, tiene el principio en estudio, el cual cumple una doble garantía individual, por una parte no ser penado más que por los hechos previamente definidos por la ley como delitos (garantía criminal) y no ser castigado con penas distintas de las establecidas previamente por la ley (garantía penal).

Tiene por tanto este principio, el carácter y rango de una importante garantía política del ciudadano, y más aún el de la garantía humana que protege al individuo contra la arbitrariedad de los jueces, le asegura que no será castigado sino por hechos que la ley haya de antemano definido como delito, y que, en caso de delincuencia, no podrá ser penado sino con las penas y conforme a las medidas previamente establecidas por las leyes; el carácter político de esta garantía se ha acentuado firmemente en los últimos años.

Por último, la tipicidad cumple una función de certeza dentro del Derecho Penal, porque, si existe el principio de legalidad en la Ley Penal, los integrantes de la colectividad deben tener en aquella una guía segura de su conducta, para que, consultando la misma, puedan establecer cuáles son los delictivos que acarrear sanciones penales y cuáles son los que no acarrear éstas, bien porque sean lícitos, o porque, siendo antijurídicos ha estimado que no son de tanta gravedad para que deban acarrear tales consecuencias, y que, con respecto a ellos basta otro tipo de sanciones para castigar a los culpables.

Esta necesaria confrontación es garantía de libertad individual pues la justicia no puede admitir elementos que el tipo no contiene, y es garantía de

seguridad colectiva, ya que toda conducta adecuada a un tipo criminoso conlleva la atribución correspondiente, eliminando así cualquier asomo de impunidad, siendo este fenómeno conocido como adecuación típica.

De las consideraciones anteriormente expuestas, se evidencia la problemática que presenta la clasificación y definición de armas de guerra, según lo estatuido en la Ley Sobre Armas y Explosivos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En atención a las consideraciones adoptadas por el investigador durante el desarrollo de este Trabajo Especial de Grado, es lógico manifestar a manera de conclusiones finales los siguientes planteamientos:

La reseña histórica de las armas de fuego, permisología o porte, clasificación de las mismas desde el punto de vista mecánico y legal, armas que se conocen desde el siglo XV, siendo estas armas de mecha, hasta fines del siglo XVII en donde surgieron las de pedernal y así llegar al siglo XIX armas de pólvora detonantes hasta las armas sofisticadas que en mucho de los casos son usadas para cometer hechos delictivos en nuestros días.

Así mismo, se debe decir que a través del siguiente estudio, se conoció todo lo relacionado al porte, requisitos para obtener dichos permisos, que además, existen varios tipos de portes amparadas por la legislación patria, así como la normativa vigente que regula esta materia, en el caso de imponer sanciones como lo establece el Código Penal, la Ley sobre Armas y Explosivos, la Ley para el Desarme; siendo esta última de recién data que tiene por objeto el desarme de las personas que poseen u ocultan armas de fuego de manera ilegal, con el fin de salvaguardar la paz, convivencia y seguridad a la ciudadanía.

También se verificó una comparación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 referente al porte, uso y fabricación de las armas de guerra y las que no fueren de guerra arrojando como resultado del artículo 324 de la Constitución 1999, se pudo observar todo lo referente a las armas de fuego que están a cargo de las Fuerzas Armadas Nacionales por medio de la Dirección de Armamento.

Otros de los resultados obtenidos a través de esta investigación en cuanto

al auge de violencia con que se comenten los hechos delictivos en Venezuela, por el uso indiscriminado de armas de fuego está vinculado con la reciente Ley de Desarme, la cual, según el criterio personal del autor resulta difícil su aplicación.

Por otra parte, el auge de violencia a que se hace referencia en este trabajo, respecto de los hechos delictivos que vienen produciéndose en Venezuela por el uso indiscriminado de armas de fuego en manos de personas no capacitadas para su porte y uso, viola toda norma legal relacionada con el libre comercio, porte y mal uso que en los actuales momentos se le da a las armas de fuego.

Es por ello, que se concluye acerca de la problemática que en la actualidad presenta la normativa inserta en la Ley Sobre Armas y Explosivos, específicamente el artículo 3, que refiere a las armas de guerra, el cual resulta ambiguo, vulnerando flagrantemente el principio de legalidad de la norma, consagrado en el artículo 49, ordinal 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1 del Código Penal venezolano.

Recomendaciones

Vistas las anteriores conclusiones es criterio del investigador proponer a manera de recomendaciones los siguientes planteamientos destinados a proponer alternativas en torno al tema investigado.

Al Legislador Venezolano

- Se le hace un llamado de atención, para que con carácter de urgencia realice una reforma integral a la Ley Sobre Armas y Explosivos, por tratarse de un instrumento jurídico que data desde 1939, lo cual trae como consecuencia que su normativa no se adapte a la problemática que en la actualidad se vive en Venezuela, derivado del uso indiscriminado de armas de fuego.
- Por otra parte, se debe reformar el artículo 3 de este instrumento jurídico.

Al Estado Venezolano.

- El autor recomienda a cada Municipio crear planes y campañas de desarme a manera de operativos abiertos a la población.
- Para completar la anterior recomendación, es necesario crear además talleres para los funcionarios a quienes corresponda desarrollar las campañas de desarme, con el objeto de cubrir expectativas en torno al tema.

A los Estudiantes de Derecho.

- Seguidamente, el autor recomienda a los bachilleres cursantes de la carrera de Derecho u otras ciencias, la continuación del presente, estudio, en especial a los próximos graduandos, a fin de que sean tratadas circunstancias no consideradas en esta investigación, pero igualmente provistas de fundamental importancia y significación para obtener otros enfoques de una misma realidad.

MATERIALES DE REFERENCIA

- Álvarez, F. (1998). *Diccionario Básico de Criminalística*. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.
- Arteaga, A. (1997) *Estudios de Derecho Penal*. Caracas. Venezuela. Editorial Jurídica Alva S.R.L.
- Autores Venezolanos (1994). *Diccionario Jurídico Venezolano D & F*. Caracas: Ediciones vitales 2000, C.A. 6^{ta} Edición.
- Cabanellas, G. (1996). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. Argentina: Editorial Heliasta S.R.L. 24^a Edición. Tomo III.
- Caldera, R. (1985) *Apuntes de Sociología Jurídica*. Maracay: Editorial Juris/mar.
- Cervantes, (1998). *Diccionario Jurídico Venezolano D & F*. 7^o Edición Venezolana. Caracas: Editorial Texto C.A.
- Código Orgánico Procesal Penal. *Gaceta Oficial N° 5.558 (Extraordinario) de fecha 14 de Noviembre de 2001*. Caracas.
- Código Penal Venezolano (2005) *Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 13 de Marzo de 2005*.
- Combellas, R. (1990). *Estado de Derecho, Crisis y Renovación*. Caracas: McGraw – Hill Interamericana, S.A.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). *Gaceta Oficial N° 36.860 (Extraordinario) de fecha 30 de Diciembre de 1999*. Caracas.
- Constitución de la República de Venezuela. (1961). *Gaceta Oficial N° 662 (Extraordinario) de fecha 23 de Enero de 1961*. Caracas.
- Garay, J. (2000) *La Constitución Comentada*. Ediciones Juan Garay

Grisanti, H. (1998) *Manual de Derecho Penal Parte Especial*. Caracas. Vadel Hermanos Editores.

Grisanti, I. (2000) *Lecciones de Derecho de Familia*. Editorial Melvin. 7^{ma}. Edic. C.A. Venezuela.

Informe Venezuela. (2001) *Derecho a la Vida, la Integridad y la Seguridad Personal. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz*, [Documento en Línea] Disponible: [<http://www.venezuelatuya.com/historia/4febrero.htm>]

Jiménez, L. (1980) *La Ley y el Delito*. Buenos Aires: Editorial Suramericana.

Larrea, J. (1998). *Manual de Armas y Tiro*. Buenos Aires: Editorial Universal.

Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. *Gaceta Oficial N° 5.551 (Extraordinarios) de fecha 09 de noviembre de 2001*. Caracas.

Ley para el Desarme. *Gaceta Oficial N° 37.509 de fecha 20 de Agosto de 2002*.

Ley sobre Armas y Explosivos y su Reglamento. *Gaceta Oficial N° 19.900 de fecha de 12 de Junio de 1939 y Gaceta Oficial N° 20.107 de fecha de 13 de Febrero de 1940*.

Longa, J. (2001) *Código Penal Venezolano Comentado y Concordado*. Caracas: Ediciones Libra.

Maldonado, P. (1998) *Uso de las Armas y Causas de Justificación en el Derecho Penal Común y Militar Venezolano*. Ediciones Centauro Caracas – Venezuela.

Martínez. (2002) *Reflexiones Acerca del Delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego*, [Documento en Línea] Disponible: [<http://www.tenenciailegaldearmas.htm>]

Maza, M. (1997). *Manual de Criminalística*. Colombia: Ediciones Librería del Profesional. Tercera Edición.

- Mendoza, J. (1986) *Curso de Criminología*. Caracas: Publicidad Gráfica León.
- Montero, M. (1998) *Propuesta para una clasificación del as Armas de Fuego*. Caracas: Editado por Livrosca.
- Montiel, J. (2001). *Manual de Criminalística*. México: Editorial Limusa, S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores.
- Osorio, M. (2000) *Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas*. Caracas: Editorial Heliasta S.R.L.
- Maldonado, P. (1997) *Uso de las Armas y Causas de Justificación en el Derecho Penal Común y Militar Venezolano*. Librería Editorial Universitaria. Maracay, Estado Aragua.
- Primer Portal Venezolano dedicado al Correcto uso de las Armas de Fuego. [Documento en Línea] Disponible: [<http://www.wtuarma.com>]
- Richani, S. (1997). *El Encarcelamiento Policial en Nuestro Sistema Penal*. Editorial Universitaria. Maracay, Estado Aragua.
- Rodríguez, A. (2001) *Constitución y Derecho Penal*. Ediciones Liber. Caracas.
- Rondón, H. (2000) *Análisis de la Constitución Venezolana de 1999*. Caracas. Editorial Exlibris.
- Rosales, A. (2000), *Guía de Estudio de Criminalística*. Maracay: Universidad Bicentennial de Aragua.
- Sullivan, J. (2002). *Sobre Desarme*. [Documento en Línea] Disponible: [<http://www.sobredesar.me.ve/htm>]
- Tabares M. (1997). *Introducción General de la Criminalística*. Maracay.
- Universidad Bicentennial de Aragua, (2006), *Guía para la Presentación del Trabajo Especial de Grado*. San Joaquín de Turmero – Edo. Aragua.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL (2005).
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. *Manual de Trabajos de
Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Caracas:
FEDEUPEL: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador.

Witker, J. (1997) *La Investigación Jurídica*. México: Mc Graw-Hill
Interamericana.